

Noveno Informe Anual de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro

Noviembre 2003 - Octubre 2004



LIBRO IV
SOBRE LAS ACTUACIONES REFERIDAS A DERECHOS DE LOS PUEBLOS

Indice del Libro IV

LIBRO IV

SOBRE LAS ACTUACIONES REFERIDAS A DERECHOS DE LOS PUEBLOS

CAPITULO I CULTURA Y MEDIO AMBIENTE

- Explotaciones mineras
- Otros
- Patrimonio Cultural y Natural
- Patrimonio Arqueológico y Paleontológico
- Otros

CAPITULO II SEGURIDAD

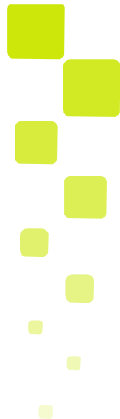
- A** Actuación de la Policía de Río Negro
- Consejos Locales de Seguridad
- B** Condiciones de detención en cárceles y comisarías
- Otros reclamos individuales
- Asistencia a detenidos y a sus familiares

CAPITULO III RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

- A** Mediación comunitaria
- B** Intervenciones informales y/o personales
- En General
- En Particular

CAPITULO VI OTROS DERECHOS DE LOS PUEBLOS

- A** Libertad de expresión y difusión. Derecho a réplica.
- B** Libre acceso a la información pública



Libro IV - Informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro



LIBRO IV

SOBRE LAS ACTUACIONES REFERIDAS A DERECHOS DE LOS PUEBLOS

Capítulo I

CULTURA Y MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Introducción

Explotación minera

Antenas de Celulares

Tala Indiscriminada

Varios

INTRODUCCIÓN

La temática medioambiental a tomado fuerza ante nuevos reclamos llegados a esta Defensoría del Pueblo, solicitando nuestra intervención en referencia a cuestiones de la más variada gama.

Así, día a día, va tomando fuerza dentro de la institución, como fiel reflejo de la realidad que nos imponen los ciudadanos, un sector específico relacionado al tema, ello es así toda vez que en muy contados y limitados casos el Consejo de Ecología y Medio Ambiente (Co.D.E.M.A.) realiza estudios o trabajos de investigación ante las inquietudes por nosotros planteadas, lo que nos lleva a tener que avanzar en forma independiente en base a consultas, convenios y relaciones con instituciones públicas y privadas para que colaboren con el escaso recurso humano y económico que posee la Defensoría del Pueblo para afrontar cuestiones de tanta envergadura.

Creo en ese sentido hemos avanzado notablemente en las relaciones interinstitucionales con las Defensorías del Pueblo, especialmente con la de la Nación, a partir de lo cual se encuentra a nuestra disposición un convenio con el CONICET para facilitar técnicos que colaboren con nuestras consultas.

Debo destacar principalmente el avance logrado luego del inicio de actuaciones de oficio, a partir de una publicación en el Diario Río Negro.

En ella se daba cuenta la inquietud de los vecinos de Ing. Jacobacci ante la posible instalación de una mina de oro en la zona y donde se recomendó al CODEMA la realización de una audiencia pública - aún en la etapa de exploración- atento a la envergadura de la problemática, constante solicitud de información y participación exigida por la comunidad de Ing. Jacobacci y provincial en general.

En respuesta a nuestra recomendación el CODEMA expresa **"en cuanto a lo solicitado -AUDIENCIA PÚBLICA- EL INC. C DE LA LEY 3266 EXIGE LA AUDIENCIA PÚBLICA CUANDO RESULTE PERTINENTE..."** en **ATENCIÓN A LA IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO**, Sorprende dicha respuesta cuando en el párrafo precedente a la misma manifestaron justamente lo contrario: *"Le informo en virtud del artículo 22 de la ley 3266 de impacto ambiental, el Municipio de Ingeniero Jacobacci no ha delegado facultad alguna a este consejo. Y sin perjuicio de ello "TENIENDO EN CUENTA LA ENTIDAD DEL EMPRENDIMIENTO EN*



CUESTIÓN, EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SERÁ EVALUADO POR EL CONSEJO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE POR EL MAYOR RIESGO PRESUNTO QUE LA OBRA IMPLICA"

Así, de manera manifiestamente contradictoria entre los párrafos, valora según un cuestionable criterio como de cierta entidad en un caso (absorción de la jurisdicción municipal) y sin gravedad en otro (falta de necesidad de audiencia pública en etapa de exploración), más allá de que es indudable que el sano análisis indica el primero.

Ello nos lleva a dos conclusiones;

- 1) es suficiente para que intervenga en el tema, pero no tanto para convocar a una audiencia pública.-**
- 2) cual es el criterio para determinar la importancia, hay un vacío legal, NO EXISTE REGLAMENTACIÓN AL RESPECTO.**

Sin perjuicio de ello, es claro que el fin de la norma citada por el CODEMA se refiere a proyectos menores, para evitar dicho acto cuando resulta realmente innecesario, lo que es claro no ocurre en este caso, que debería tomar como una obligación legal clara, tal cual lo expresamos en la resolución de recomendación que luego analizaremos.

Sin perjuicio de este introito sobre la cuestión sustancial en debate, actualmente todo lo expuesto se desarrollará detenidamente en el apartado primero del presente capítulo.

Asimismo, la conformidad demostrada por un grupo de vecinos de Viedma que veían con preocupación la realización de las obras en la costanera de la ciudad, luego de evacuadas las consultas e informes ambientales al Departamento Provincial de Aguas, organismo encargado de la realización de las mismas.

Como es costumbre en cada informe manifestamos nuestra satisfacción con el tratamiento dado en nuestra provincia en la problemática del PCB, la cual gracias a la intervención seria y comprometida de cada uno de los organismos involucrados nos encontramos en las últimas etapas del proceso de descontaminación, así actualmente y entre casos puntuales se investiga la presencia o no del líquido contaminante lo cual determina los pasos a seguir. Puntualmente en referencia a ello se trabaja coordinadamente con los Concejales de Allen en la erradicación de contenedores contaminados existentes en los depósitos de la empresa EDERSA en la localidad, en el marco de lo cual se le facilitó información y asesoramiento para permitir un resultado más rápido y eficaz posible ante la gravedad de la cuestión planteada.

Podemos expresar sobre otras cuestiones particulares que tramitan ante la institución, la intervención mediadora realizada ante un conflicto surgido en la Comisión de Fomento de Cona Niyeu y vecinos del lugar, quienes plantearon su desacuerdo ante la tala de árboles existentes en la plaza del pueblo, un espacio con forestación añosa que es difícil de lograren las condiciones climáticas en que viven. En consecuencia se acordó una entrevista con todos los actores involucrados (Subsecretario del Interior, Gerente de Direcciones de Fomento, Director de Bosques y vecinos del lugar, que



luego de un fructífero debate se acordó frenar las extracciones y consensuar el proyecto de parqueización donde intervenga y opinen todos los interesados a lo cual se encuentran avocados.-

Otra de las intervenciones realizadas y que nos encontramos en estudio, se relaciona con la contaminación del Lago Pellegrini, uno de los espacios verdes y recreativos más importantes del Alto Valle el cual, a partir de políticas regresivas al medio ambiente, afectan directamente el futuro turístico y de esparcimiento de la villa. Así previo a emitir nuestra opinión definitiva al respecto nos encontramos evaluando los informes enviados por el DPA y los que en el futuro se soliciten, buscando al momento de pronunciarnos aportar datos útiles para que nuestra intervención sea una crítica constructiva y reparadora del ecosistema involucrado.-

Por último deseo resaltar el compromiso asumido con los vecinos de Bariloche en una serie de pedidos de intervención en referencia a la instalación de un barrio privado que afectaría gravemente al Lago Gutierrez, su preocupación por la urbanización de la zona del Mallin del Km. 12 y las consecuencias ecológicas que de ello se deriven, la construcción de la sede de INVAP donde se utilizaría material radioactivo en cercanías a un barrio residencia.

EXPLOTACIÓN MINERA EN LA PROVINCIA

-PROYECTO CALCATREU-

En el mes de Julio del año 2003, ante publicaciones periodísticas que daban cuenta de la inminente explotación minera de oro mediante métodos no sustentables, iniciamos de oficio actuaciones para evaluar la gravedad de la problemática. Solicitamos informes al la Dirección Provincial de Minería y al Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA), actuaciones dentro de las cuales se fueron incorporando los pedidos de intervención realizados por los vecinos autoconvocados y el Legislador Javier Gimenez. Luego de ver que nos encontrábamos ante una delicada cuestión, se decidió visitar la zona, entrevistarnos con los vecinos, CODECI, Comunidades indígenas linderas a la exploración, Directora de Minería, Ente de la Línea Sur, Empresa, CODEMA, etc., lo cual consta en el acta que a continuación se transcribe en forma íntegra

"Viedma, 10 de Mayo de 2004. CONSTE: que con motivo del reclamo presentado por un grupo de vecinos de la localidad de Jacobacci, en el cual plantean sus dudas sobre el efecto en el medio ambiente que produce la actual exploración e hipotética explotación de la mina de oro y plata denominada Calcatreu, nos constituimos en la zona a los efectos de escuchar a los vecinos y recabar información al respecto.

Así llegados al lugar, con fecha 5 del mes de mayo a las 18:30 hs. nos presentamos ante la asamblea convocada ante nuestra presencia, y que se encontraban los denominados **vecinos autoconvocados, el presidente y vocales del CODECI (Consejo de Desarrollo Indígena), Jefes Mapuches de la zona involucrada, docentes y vecinos interesados**. Se procedió a escuchar las diferentes opiniones en referencia a la problemática, identificando principalmente una gran incertidumbre y desconocimiento técnico del tema, manejo disperso e inorgánico de información y temor a la falta de control por parte de los organismos encargados del supervisar los posibles daños en el medio ambiente. Asimismo se expone el delicado equilibrio ecológico que existe en la

zona y la catástrofe que implicaría su intervención en el mismo, principalmente en el agua.-

Ante el pedido del jefe de la Comunidad Indígena (Lonko), el día siguiente nos constituimos ante una **asamblea de Mapuches linderos con la actual exploración**, en la misma surgieron similares planteos sobre el desconocimiento general del tema, especialmente en lo que a la parte minera y medioambiental se refiere, percibiendo una incierta expectativa laboral en la instalación del emprendimiento para los lugareños.-

Posteriormente el día 6 de mayo, **nos constituimos en la zona donde se llevan adelante las tareas de exploración junto con el Jefe Mapuche del lugar y representantes del CODECI**, constatando efectivamente que se encuentran trabajando en la extracción de pilotes de piedras de los cerros, las que son apiladas en un predio cercano y luego se derivan para su análisis. En dicho procedimiento se verifica la utilización de agua y una maquinaria pesada operada por tres personas. Se puede apreciar una modificación sustancial en aspectos de los dos cerros principalmente afectados, en los cuales hay un centenar de pozos de cateo. Asimismo el camino utilizado por las camionetas de la empresa esta muy desmejorado, dado que no está preparado para absorber el movimiento que ellas, junto con la maquinaria generan, lo que hace casi inaccesible para los vecinos y personas sin ese tipo de vehículo. Asimismo se tomaron muestras de suelo, piedra molida y agua que quedaron en poder de la apoderada legal del CODECI Dra. Nora Aravena y se filmó todo lo expuesto en la presente acta. Se agrega copia del informe realizado por la Dra. Ana Huentelaf al CODECI.-

Llegados nuevamente a la localidad de Jacobacci nos reunimos nuevamente con parte de los vecinos autoconvocados, a los efectos de que nos hagan formal entrega de la documentación que poseen sobre el tema y copia de la nota presentada por ellos al Sr. Gobernador de la Provincia, que se agrega como Anexo A en las presentes actuaciones. Asimismo se le brindó asesoramiento general sobre la legislación aplicable al tema, especialmente en referencia a la ley Provincial 3266 y su Procedimiento de Evaluación Ambiental.-

En el día 7 del mismo mes y año, nos constituimos en la empresa Minera Aqualine S.A., sita en calle San Martín Nro. 49 de Ing. Jacobacci, entrevistándonos con el representante de la misma en la zona, el Sr. Rick Brown y Geoffrey Keyte a quienes explicados los principales interrogantes recabados en los habitantes de la zona, expresaron su predisposición al diálogo y voluntad abierta a explicar el trabajo que realizarán para extraer el oro y la plata, para lo cual ofrecieron constituirse en Viedma a los efectos informativos, aproximadamente en el plazo de 15 días.-

Por último se mantuvo una entrevista con el Presidente del Ente de Desarrollo la Línea Sur, el Sr. Roberto Lauriente, quien expresó que actualmente se encuentran evaluando el tema, que aún no posee la información suficiente para dar una opinión. Asimismo solicita y ofrece la más amplia voluntad para avanzar en la búsqueda de profesionales idóneos que esclarezcan la problemática y nos lleven a tomar la mejor decisión para todos. Finalizada la misma se da por concluida la visita a la zona. -Sin más se cierra la presente acta.-

El día 13 de Mayo de 2004, nos entrevistamos con las partes gubernamentales, por un lado la Lic. Carmen Wagner, Directora General de Minería e Hidrocarburos de la Provincia a efectos de solicitar información y posteriormente con el Sr. Oscar Echeverría, Presidente del CODEMA, quien facilita los Estudios de Impacto Ambiental presentados por las empresas mineras.



Considerando necesario tomar una posición al respecto dictamos la Resolución 622/04 "DPRN", en la cual se hace un síntesis de la actividad realizada hasta esa fecha, principalmente en referencia al análisis normativo, doctrina y antecedentes nacionales e internacionales recabados en referencia a la cuestión que nos ocupa, así luego de un extenso repaso nos consideramos en la obligación de convocar a una Audiencia Pública a los efectos esclarecedores e informativos por parte del CODEMA, aún en la etapa de exploración, toda vez que la gravedad y la exigencia ciudadana de información sobre el tema lo imponía en tal sentido.-

Asimismo se cursaron nuevos pedidos de informes para avanzar sobre la cuestión sustancial y no quedar sólo a la espera de la actitud del organismo.

Creo oportuno en consecuencia transcribir en forma íntegra el contenido de la mencionada recomendación:

"Viedma, 11 de Junio de 2004

VISTO: El Expediente N° 3083/03 del registro de esta Defensoría del Pueblo, caratulado "Defensoría del Pueblo de R. N. s/ Desconcierto de los vecinos de Ing. Jacobacci sobre actividades de Empresa Minera - Proyecto Cacaltreu - ", y

CONSIDERANDO:

I

a) Avocación al tema.

Que a fojas 1 consta una publicación efectuada por Alumnos y Docentes de la Escuela Nro. 6 de Ing. Jacobacci, acompañada por 79 firmas, en el espacio denominado "carta de lectores" del Diario Río Negro de fecha 19 de Junio del año 2003 en la cual plantean su desinformación y dudas sobre las consecuencias ambientales que pudiera provocar la explotación cercana al lugar de residencia, de una mina mediante la utilización de Cianuro, por lo cual solicitan la intervención de las autoridades públicas a efectos que realicen los controles correspondientes.

Que a fojas 2 consta la respuesta brindada por las autoridades ambientales provinciales expresando la conformidad en los procedimientos realizados para las etapas de exploración y cateo en la zona objeto de la presente.

Que a fojas 3 la Defensoría del Pueblo de la Provincia decide la avocación al tema, de acuerdo a las atribuciones conferidas por la ley 2756, art. 9, primer párrafo, el que permite la intervención de oficio en los hechos que lleguen a su conocimiento y apartado d) el cual expresamente contempla dentro de la competencia de la Institución "Promover la defensa y protección del medio ambiente frente a cualquier acto, hecho u omisión, capaz de dañar los ecosistemas naturales, el entorno o el paisaje, alentando la mayor concientización de la sociedad para la preservación y expansión de los espacios verdes y el reconocimiento y valoración de los derechos relativos a la fauna".

Que por ello a fojas 4 y 5, se solicitan informes sobre el tema al Consejo de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) y a la Dirección de Minería e Hidrocarburos.

Que a fojas 6 y 7 La Dirección de Minería manifiesta "...en la actualidad la empresa se encuentra explorando a los efectos de definir la factibilidad de la explotación..., en relación a la preocupación de los habitantes de la localidad y a pedido de la Directora del Instituto Técnico Terciario, esta Dirección se encuentra preparando charlas informativas..., circunstancia que ha sido comunicada a la Directora del CEM Nro. 6." Posteriormente y anticipando su posición respecto a la explotación a cielo abierto y con el uso de determinadas sustancias para la separación del oro, expresa "Esta Dirección ha seguido con profunda preocupación los hechos ocurridos en la Provincia de Chubut, donde prácticamente se ha paralizado la actividad minera, dictando leyes inconstitucionales que se oponen a la legislación Nacional y Provincial. Todo ello producto de un profundo desconocimiento de la actividad, motivo por el cual nuestro compromiso es comenzar a difundir lo que implica la puesta en marcha de un proyecto de estas características".

Que a fojas 8, la Lic. Nélica Gazia, Directora de Política Ambiental del CODEMA, manifiesta "que la empresa Normandie - La Source Developp, está en una etapa de exploración..., en el cual se utilizan..., 1000 metros de perforación con aire reversa, 400 metros de perforación con dinamita, para la recuperación de testigos, que utilizan aditivos no tóxicos y biodegradables como refrigerantes. En el informe de evaluación de impacto ambiental se detallan los nombres comerciales, el volumen de agua a que con-

sumirán en el trabajo y la remediación que efectúan...", "Tras estos trabajos, que evidenciarán la factibilidad económica del proyecto, o no, deberán presentar, de continuar con el proyecto, la pertinente evaluación de impacto ambiental para la etapa de Explotación, según lo indica la ley 3266". Reafirmando finalmente y a modo de síntesis "Es claro que la etapa de exploración, en ejecución, por todo lo expuesto, no reviste impacto alguno en el ambiente".

Que a fojas 13 con fecha 3 de mayo de 2004 constan las actuaciones iniciadas por el Legislador Provincial, Señor Eduardo Javier Jiménez, ante esta Institución, las cuales ante la identidad del reclamo, se anexan a las presentes.

Que a fojas 15 se adjunta una nota presentada por varios vecinos de Jacobacci quienes expresan su preocupación sobre el tema y solicitan nuestra presencia en el lugar.

Que habiéndole sido delegadas la funciones, la Defensora del Pueblo Adjunta de la Provincia participa, el 5 de mayo de 2004, de una reunión con los Vecinos Auto convocados "La Pírita" en un Centro Comunitario en Ing. Jacobacci, con representantes del CODECI (Consejo de Desarrollo Indígena) y Jefes Mapuches de la zona.

Que en síntesis expresaron sus dudas, inquietudes y miedos respecto de la salud humana y demás seres vivientes, uso indiscriminado de agua, todo, probablemente, a causa de las actividades mineras de la zona, sintiéndose avasallados en su dignidad de ciudadanos por no tener toda la información de parte de las autoridades gubernamentales, manifestaron su oposición a formar parte de cualquier tipo de "comisión evaluadora", la necesidad de información de todas las actividades mineras cercanas a su comunidad y el claro manifiesto a que no les mientan mas.

Que el 6 de Mayo del año 2004 se presenta en el lugar donde se desarrolla la actividad de exploración denominado Proyecto Cacaltreu a 82 Km. de Ing. Jacobacci.

Ante el pedido del Jefe de la Comunidad Indígena (Lonko) se constituye ante una Asamblea de Mapuches linderos con la actual exploración, en la misma surgieron similares planteos sobre el desconocimiento del tema, especialmente en lo que a la parte minera y medioambiental se refiere, percibiendo una incierta expectativa laboral en la instalación del emprendimiento para los lugareños.

Que al constituirse en la zona donde se llevan adelante las tareas de exploración junto con el Jefe Mapuche y representantes del CODECI, constato efectivamente que se encuentran trabajando en la extracción de pilotes de piedras de los cerros (cutting), las que son guardados en cajones de madera, luego apilados en un predio cercano y luego derivados para su análisis.

En dicho procedimiento se verifica la utilización de agua y una maquinaria pesada manejada por tres operarios.

Puede apreciarse una modificación sustancial de dos cerros, en los cuales hay un centenar de pozos de cateo.

El estado del camino, utilizado por las camionetas de la empresa, está muy desmejorado, dado el movimiento que ellas, junto con la maquinaria pesada hace casi inaccesible para los vecinos y personas sin un tipo de vehículo de doble tracción.

Se tomaron muestras de suelo, piedra molida y agua que quedaron en poder del CODECI, Consejera Dra. Nora Aravena y registro filmico de todo lo expuesto en la presente.

Asimismo, se agrega copia del informe realizado por la Dra. Ana Huentelaf, asesora legal del CODECI.

Llegada nuevamente a la localidad de Jacobacci se reúne con parte de los vecinos auto convocados, a efectos de recibir formalmente la documentación que poseen sobre el tema y copia de la nota presentada por ellos al Sr. Gobernador de la Provincia, que se agrega como Anexo A y entrega de la Defensora Adjunta del Pueblo del material de leyes aplicables, todo en miras de socializar la información disponible.

El 7 de mayo de 2004, se constituye en la Empresa Minera Aqualine S.A., sita en calle San Martín Nro. 49 de Ing. Jacobacci, se entrevista con el representante en la zona, el Sr. Rick Brown y Geoffrey Keyte, a quienes expuestos los principales interrogantes de los vecinos, expresaron su predisposición al diálogo y voluntad a explicar el trabajo que realizarán para extraer el oro y la plata.

Por último se mantuvo una entrevista con el Presidente del Ente de Desarrollo la Línea Sur, Sr. Rodolfo Lauriente, quien expresó que actualmente se encuentran evaluando el tema, que aún o posee la información suficiente para dar una opinión. Que solicita ayuda y ofrece la más amplia voluntad para avanzar en la búsqueda de profesionales idóneos que esclarezcan la problemática y nos lleven a tomar la mejor decisión para todos. Finalizada la misma se da por concluida la visita a la zona.

El 13 de Mayo de 2004, se entrevista con las partes gubernamentales, por un lado la Lic. Carmen Wagner, Directora General de Minería e Hidrocarburos de la Provincia a efectos de solicitar informa-

ción, quien provee del último mapa catastral minero que se adjunta como Anexo B y posteriormente con el Sr. Oscar Echeverría, Presidente del CODEMA, quien facilita los Estudios de Impacto Ambiental presentados por las empresas mineras, aprobados y que se adjuntan como Anexo C.

Asimismo se deja constancia que el día 26 de Mayo de 2004 ha tomado contacto con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy, Sr. Víctor Galarza, dada la asombrosa similitud de la problemática socio ambiental que están viviendo, expuesta en una publicación periodística del día 25 de mayo del corriente en el medio Noticias de la Costa y que en síntesis manifiesta que: *"se encuentra investigando una denuncia realizada por ganaderos que la contaminación del agua y la modificación del terreno provocadas por trabajos de empresas mineras que explotan oro, han causado la mortandad de animales y daños ambientales en la zona de la puna... Que la misma se realiza para determinar si se cumplieron las leyes que rigen la explotación minera y cuáles son las responsabilidades que pudieran tener organismos como Recursos Hídricos... y que existe en la zona un impacto ambiental negativo por el cambio del paisaje natural que hubo a raíz de la exploración y explotación minera"* manifestado luego de realizar una visita a los vecinos de los pueblos de Orosmayo y Liviara. *...Los ganaderos dijeron que los pozos abiertos en el terreno por el trabajo minero fluye agua con turbiedad, formando pequeñas lagunas llenas de arcilla, que contaminan el agua que beben los animales, que la tornan inútil para el abrevado del ganado... que la remoción de tierra produjo una modificación súbita de la armonía natural, apreciada por los nativos y que impide también la reposición de la escasa vegetación de la zona... ya que forma parte de la región de la puna, donde la temperatura suele descender a 20 grados bajo cero en invierno y los habitantes viven de la carne que les proporcionan las ovejas y llamas, con cuya lana tejen sus propias prendas de vestir...."*

II

INTRODUCCION

Que siendo necesario integrar las diferentes preocupaciones ambientales, sociales y económicas en la visión de un desarrollo sustentable provincial y la necesidad de tomar un rumbo o seleccionar un método de acción entre alternativas que, dadas determinadas condiciones, servirán para guiar y definir decisiones presentes y futuras a nivel local y regional.

Que por la naturaleza extractiva de la actividad minera de alterar necesariamente una determinada situación ambiental local, la necesidad de compatibilizar los beneficios económicos y sociales que recibiría la comunidad de Ing. Jacobacci, con las alteraciones que provocaría en el ambiente regional, en un marco de alto porcentaje de incertidumbre respecto de la recuperación y / o su mitigación.

Que es necesario inducir acciones que den respuesta a la necesidad de preservar los sistemas vitales del hombre en la tierra, por estar íntimamente ligados a la noción de calidad de vida y con ella la salud, la seguridad y la productividad.

Que es necesaria la participación para el desarrollo sustentable existiendo espacios gubernamentales oficiales y formales como los mecanismos de democracia participativa, con efectos jurídicos para la administración y el ciudadano como las audiencias públicas y siendo una oportunidad de encuentro entre los responsables de una decisión pública de alcance general con los protagonistas de la sociedad.

Que dicha participación exige de una importante dosis de información compartida para que sea oportuna, productiva y efectiva, como así también, lo solicitan nuestras leyes vigentes.

Que entendemos a la Evaluación de Impacto Ambiental EIA como un procedimiento administrativo de toda decisión pública que pueda tener una incidencia negativa significativa en el ambiente y en la sociedad.

Que desde una mirada participativa, es un procedimiento que se realiza para garantizar la mejor calidad posible de una decisión o acto de la Administración.

Que en ella, dicha información técnica es para poner a consideración de TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS y así garantizar que las opciones de proyectos, programas y planes, resultaran ambiental y socialmente apropiados y Sustentables.

III

ANALISIS de CONTEXTOS

1) Social, cultural y filosófico

Con los dichos de nuestros vecinos de la Puna a través de su Defensor del Pueblo y los de Ing. Jacobacci constatadas por la firmante, se evidencia la percepción colectiva del valor ambiente, la preocupación de efectos en el equilibrio del ecosistema y la incertidumbre de los que viven hoy y por los que todavía no han nacido.



Esas percepciones del entorno, sus problemas y/o las propuestas de posibles soluciones, son las de las personas que viven y se desarrollan allí y son el cimiento vital para la construcción de cualquier accionar público en materia ambiental y que en definitiva, son la viva voz, que expresan sus derechos, el derecho de los pueblos.

¿Existe una percepción correcta? ¿Cuáles son las soluciones adecuadas? Sólo incertidumbre, no existen soluciones universales sobre problemas ambientales, lo que si podemos asegurar es que sólo existen procesos interactivos sucesivos que pueden facilitar las búsquedas colectivas de soluciones en función de objetivos ambientales, también formulados colectivamente.

En la presente nos sumergirnos de lleno en las conceptualizaciones de aquellos términos que creemos nos servirán para ir configurando un lenguaje común y así poder entendernos y compartir este diálogo que intentamos tenga fines educativos.

Recordamos a Ruth Nanda Anshen en la introducción al libro de Erich Fromm "Tener o Ser" cuando se refiere al **conocimiento como medio para liberar a la humanidad de la fuerza destructora del miedo y señalar el camino hacia la meta de la rehabilitación de la voluntad humana y hacia el renacimiento de la fe y la confianza en la persona humana...** y siendo la información una de las bases del conocimiento, podemos inferir que la información da libertad.

Así, conceptos tales como impacto ambiental, evaluación del impacto ambiental - EIA -, evaluación ambiental, estudio de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental y Resolución Ambiental, junto a medio ambiente y desarrollo sustentable, son conceptos semejantes que utilizamos indistintamente, pero que debemos diferenciar porque denotan ideas claramente distintas y si no lo hiciéramos, caeríamos en errores no sólo de comprensión y uso aislado de los mismos, sino también en las formas de actuar sobre la realidad y como consecuencia en los procedimientos y decisiones.

Veamos y citamos la fuente, Modulo de Entrenamiento de EIA realizados por las Fundaciones Mapfre y Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo para América Latina:

MEDIO AMBIENTE: según PNUMA/92 "Es el conjunto de elementos naturales, artificiales o inducidos por el hombre (físicos, químicos y biológicos) que propician la existencia, la transformación y el desarrollo de los organismos vivos." -

DESARROLLO SUSTENTABLE "el desarrollo que permite alcanzar las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de alcanzar sus propias necesidades" -

IMPACTO AMBIENTAL "cambio en algún parámetro, durante un periodo de tiempo y en una determinada área, como resultado de una actividad particular. Tal cambio puede ser comparado con la situación de ese parámetro si dicha actividad no hubiese tenido lugar" -

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA - "es una herramienta preventiva y predictiva de incidencias significativas en el ambiente y por ende en la sociedad, de una acción futura que se incorpora a un procedimiento jurídico - administrativo" -

EVALUACION AMBIENTAL "es un proceso de investigación diagnóstica de una realidad determinada" -

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL "es el instrumento que permite ordenar el análisis en torno a elementos científica y técnicamente presentados" -

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA- "es un dictamen formal del Estado, con efectos jurídicos, que en nuestro caso provincial, la ley ha denominado Resolución Ambiental - RA

Así, el estudio de impacto ambiental, los resultados de las observaciones y las informaciones adicionales obtenidas a través de las instancias administrativas de consulta y análisis de la propuesta, sirven para que las autoridades públicas responsables adopten decisiones caracterizadas por la máxima fundamentación y razonabilidad técnica, viabilidad económica y legitimidad social, tres cualidades esperadas por la sociedad respecto del buen gobierno, importantes de todo procedimiento de EIA que apuntan al logro de la mejor decisión pública ambiental.

2) Jurídico: Legislación Aplicable

Entendemos que en un estado de Derecho, el accionar del Estado debe estar subordinado al derecho, es decir al contenido de las normas que marcan los límites de los actos de cada uno de sus protagonistas en un contexto.

Asimismo el Derecho Minero se relaciona con otras ramas del derecho en general, pudiendo citarse al derecho constitucional que por el art. 75, Inc 12 de la Constitución Nacional que otorga al Congreso la facultad de dictar el Código de Minería; con el derecho administrativo siendo el Estado



dueño de las minas y con el derecho procesal, siendo un Código de fondo y forma a la vez.

Ahora bien, nos preguntamos: cuando el Estado tiene que resolver los conflictos, ¿administra los distintos intereses teniendo en cuenta la diversidad? ¿Entra lo diverso como símbolo cultural valioso? ¿Se tiene en cuenta a un sólo sector o interés? ¿El pueblo de Ing. Jacobacci desea sacrificar su capital ambiental? ¿Tiene relación, la hipotética minimización de impactos ambientales, en beneficio de una actividad privada? ¿Se ha demonizado a una de las ramas de la actividad económica? ¿Es sustentable crear fuentes de trabajo genuino a corto plazo?.

Evidentemente debe triunfar el consenso por sobre la imposición del más fuerte, el diálogo y la deliberación por sobre el despotismo y la imposición, en un clima de tolerancia, respeto a la diversidad, aceptación de valores, donde su efectiva observancia culmina en la experiencia de una cultura compartida que hace de la democracia, no sólo un sistema institucional definido en la ley fundamental, sino un estilo de vida que trasluce todo el espectro y dentro del cual transcurre la existencia de nuestra Nación.

De acuerdo a este proceso interactivo sucesivo denominado Proyecto Cacaltreu y teniendo en cuenta la información recabada, consideramos oportuno señalar la legislación vigente, toda vez que la misma debe aplicarse a las actividades de exploración y eventual explotación de la empresa minera en la zona y recordando uno de los principios rectores de la temática ambiental

"pensar globalmente y actuar localmente".

Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo - Río de Janeiro - 5 de Junio de 1992

Principio10 "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de todos"

a) Constitución Nacional

La misma prescribe en su Art. 41 *" todos los habitantes gozan del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo. El daño Ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.*

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos".

Debemos destacar que más allá de los principios generales sobre el medio ambiente, la distribución de competencias entre nación y provincia en referencia a los Presupuestos Mínimos, hoy de Orden Público por la Ley Nacional Nro. 25.675, deben conjugarse con la complementariedad y no contradicción en la legislación provincial, todo ello sin perjuicio de la ejecución por parte de las autoridades locales.

b) Legislación Nacional

Los presupuestos mínimos establecidos en la norma constitucional se regulan en varias normas, dentro de las cuales la principal es la de Política Ambiental Nacional, Ley Nro. 25.675; seguida de la Ley 25.612 de Residuos Peligrosos; Ley Nro. 25.688 Gestión Ambiental de Aguas y Acceso a la Información Ambiental Ley Nro. 25.831.

Destacaremos los artículos de interés para el caso:

b.1) Ley Nacional de Política Ambiental Nro. 25.675

Señalamos la competencia, daño ambiental, características principales del procedimiento y autoridades ambientales



Art. 3 "La presente ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de Orden Público y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en esta".

Art. 27 ... define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos..."

Establece de esta forma un mecanismo de derogación tácita de las leyes anteriores, tanto Provinciales como Nacionales, por el juego del art. 41 de la C.N. que vimos precedentemente.

Art. 20 refiere como característica principal en los procedimientos, que las autoridades deberán aplicar, citando expresamente en las consultas y audiencias públicas aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos en el medio ambiente. La opinión no será vinculante. Garantizando la participación ciudadana, principalmente en las etapas de planificación y evaluación ambiental (art. 21)

Art. 23 y 24 establecen como autoridad de aplicación de la ley al (COFEMA) Consejo Federal de Medio Ambiente, Asamblea del COFEMA, Secretaría Ejecutiva y Secretaría Administrativa.

Anexo A, Art. 2 establece como funciones del COFEMA. "Inc. 7)) Exigir y controlar la realización de estudios de impacto ambiental"

Arts. 8, 9 y 10 le atribuyen a la Asamblea la posibilidad de Emitir Recomendaciones y Resoluciones vinculantes.

b.2. Ley Nacional de Gestión Integral de Residuos Industriales Nro.25.612

Art. 1 establece que la misma será aplicable en caso de "...obtención de un producto final mediante métodos industriales". Dicho producto deberá ser considerado residuo en los términos del Art. 2 "cualquier elemento..., obtenido como resultado de un proceso industrial..., relacionado con la actividad..., el cual su productor o generador no pueda utilizarlo y deba desprenderse de el..." Sucedido ello es necesario su aplicación en la búsqueda de los objetivos previstos en el Art. 4 " a) Garantizar la preservación ambiental..., b) minimizar los riesgos ambientales..., e) promover la cesación de los vertidos"

Debe destacarse la clara inclusión de los desechos por lixiviación de cianuro.b.3 Ley Nacional de Gestión Ambiental de Aguas.

Objetivos, competencia y autoridad de aplicación

Art. 1, el cual reza "preservación, aprovechamiento y su uso racional" entendiéndose por ello lo fijado en el Art. 5 "se entiende por utilización... inc. f) la colocación e introducción de sustancias en aguas subterráneas, inc b) el estancamiento..., i) las acciones aptas para provocar permanentemente o en una medida significativa, alteraciones en las propiedades físicas, químicas o biológicas de agua".

Art. 7 "elaborar el plan nacional del agua, para el aprovechamiento y preservación. Determinar los límites máximos que se podrá contaminar", y asimismo podrá "determinar como zona crítica determinadas cuencas, por sus características naturales o de interés ambiental" Art. 8.

Siendo el agua un recurso escaso y de vital trascendencia a nivel planetario, la tendencia actual es la búsqueda de su reserva y es prioritaria a los restantes recursos naturales, por lo cual la armonía de este recurso con la actividad minera, debe ser cuidadosamente tratado, controlado, auditado y fiscalizado.

b.4. Acceso a la Información Ambiental Ley Nro. 25.831.

La base de información de los decisores debe ser potencialmente la misma que la de cualquier ciudadano común, siendo el sustento de decisiones lógicas y razonadas. Así, sabemos que en los temas medioambientales, tan específicos y alejados del conocimiento cotidiano, es necesario que se garantice el acceso a la información de modo amplio, suficiente y comprensible.

En tal sentido la ley busca garantizar el acceso a la información en el ámbito Nacional, Provincial y Municipal Art.1. Comprende al Estado en sus Políticas, Planes, Programas y Acciones. Art. 2, públicas o privadas y deberá brindarse dentro de un plazo de 30 días Art.4 y 8

b.5 Ley n° 24.585 / 95 Protección ambiental de la actividad minera

Esta Ley sustituye el art. 282 del Código de Minería e incorpora un Título Complementario sobre Protección Ambiental para la actividad minera. Sabemos que dicho código data del año 1882 y define a la minería como una actividad de "utilidad pública", o sea, es un interés superior que hace al bienes-

tar general y recordemos que antiguamente dicha actividad era de tipo artesanal (pico y pala) aunque por su naturaleza extractiva, hoy sabemos que es una actividad de gran impacto.

En su Art. 5 establece las obligaciones de las personas jurídicas, como las compañías de minas y establece que tanto en su actividad de "exploración" debe presentarse el "informe de estudio de impacto ambiental" y en la actividad de explotación realizarlo en un nivel mas profundo, a fin de evitar daños y que estarán a cargo de quien quiera explotar.

El titular del dominio es el Estado (teoría regalista) y que desde el punto de vista jurídico, otorga un permiso y/o concede la explotación.

La actividad que aquí nos ocupa es sobre minerales de primera categoría ya que se trata de oro y la plata, por lo que el propietario es el Estado.

Asimismo por la reforma constitucional del año 1994, los Municipios son autónomos que fijan las condiciones y las Provincias conservan el poder no delegado a la Nación pero se aplica el Código de Minería, ya que es de fondo.

También por el art. 41 de la Constitución Nacional se ha establecido la obligación de recomponer (dejar el terreno igual) que es un imposible para la actividad minera.

Por ello deberían contener los siguientes ejes en las EIA:

- 1) **Incorporación del costo ambiental, porque el ambiente es un derecho público subjetivo e incorporarlo a las cuentas del Estado y prever un porcentaje para amortizarlo;**
- 2) **Elevar la calidad de vida mediante la información, educación y participación para no contribuir a la marginalidad y creación de pueblos fantasmas;**
- 3) **Hacer "inventario ambiental" para saber que tenemos y darles "valor", en un marco de derecho, como herramienta de una política de desarrollo, de largo plazo para que sea sustentable, tal como se ha declarado en Río 92 con el principio de intervención estatal para proteger al ambiente y no dejarlo librado a las normas de mercado.**

Pero la reforma es liberal y por ello es necesaria una política de seguimiento de la autoridad de aplicación con su poder de policía y la nuestra de ponerlas de manifiesto y observarlas en caso de no cumplimiento.

De la educación y Defensa ambiental

Encomienda la ley a la Autoridad Minera (Dirección de Minería) la implementación de programas de información e ilustración con la finalidad de orientar a la población, en particular a la vinculada a la actividad minera, según reza el Art. 22, sobre la comprensión de problemas ambientales, sus consecuencias, la prevención de acuerdo a particularidades regionales, étnicas, sociales, económicas y tecnológicas del lugar donde se desarrollen las tareas.

Diversas incidencias ambientales son consideradas particularmente en la disposición aludida sobre las cuales influye la actividad minera y se debe orientar a la población.

Interesante resulta la obligación impuesta a la Autoridad de Aplicación de proporcionar información a quien lo solicite respecto de la aplicación de las presentes disposiciones.

El derecho a la información, por lo tanto, estaría garantizado por la expresa disposición legal.

Conclusión respecto de la ley: ha sido un avance legislativo nacional, un medio para encausar la actividad minera previniendo de posibles consecuencias negativas que han sufrido otros países en el ambiente.

El desarrollo sectorial implica, sin embargo, que estas exigencias legislativas sean de naturaleza objetiva, que si bien podría suponerse, en el caso que nos ocupa, que la corporación minera se auto impuso códigos de conducta ambiental, cuyos recaudos podrían ser mas exigentes que los requeridos por la legislación local, son todas hipótesis que hoy los ciudadanos rionegrinos desconocemos ya que nos son inciertas.

También podríamos confiar en interpretar que esta legislación nacional pueda finalmente acompañar al crecimiento de un modo sustentable, que por primera vez en nuestro historial económico se vislumbrarían otros recursos para la región, pero las voces ciudadanas, la información periodística y la circulante en Internet parecen no acompañar de un modo pacifico, además de la desconfianza en el ejercicio del poder de policía que debería haberse ejercido previamente, que quedaría para las actividades de explotación futuras.

Legislación Aplicable de implicancia Económica

b.6 Ley de Inversión Minera Nro. 24.196 y Decreto 417 / 2003

El art. 8° de esta, modificado por el art. 2° de la Ley Nro. 25.429 Facilita la entrada de capital extranjero, asegura a los inversores una estabilidad fiscal por 30 años, comprendiendo también los regímenes cambiario y arancelario, esto es un tratamiento impositivo diferenciado, elimina el gravamen a importaciones o deducciones especiales para fomentar la protección del medio ambiente, entre otros beneficios.

b.7 Ley de Ordenamiento Minero Nro. 24.224

El Estado entrega sin costo información geológica - minera, básica para orientar la inversión y se incrementan las superficies destinadas a exploración y explotación.

b.8 Ley del Acuerdo Federal Minero Nro. 24.228

La Argentina ofrece un tratamiento jurídico homogéneo a la inversión privada.

b.9 Ley de Financiamiento y Devolución del IVA . 24.402

Creando un Régimen que estimula las inversiones privadas en bienes de capital y obras de infraestructura, fomentando la producción de minerales con destino a la exportación.

c) Legislación Provincial

c.1 Ley Provincial 3266

Sancionada en el mes de diciembre del año 1998, busca responder a las necesidades provinciales en referencia a la cuestión ambiental. Establece como Autoridad de Aplicación, Conf. Art. 21 al MUNICIPIO o al CODEMA si le delegó la facultad de control.

Requisitos para iniciar trabajos:

Exige en su Art. 6 "la emisión de la Resolución Ambiental obligatoria previo a realizar cualquier tipo de actividad prevista en dicha ley".

El Art. 3 contempla dicha actividad y específicamente en su inc. h) establece "la prospección, exploración, explotación, acopio e industrialización de recursos mineros y el tratamiento y depósito de los residuos"

Sin perjuicio de ello en términos generales los inc. m) y n) serían de aplicación subsidiaria, toda vez que los mismos contemplan a la eventual "contaminación de un modo significativo del suelo, agua, aire y flora..." y "cualquier otro proceso de efecto degradativo en el ambiente".

Por ello, es necesaria una Resolución Ambiental para realizar las actividades que actualmente se encuentra desarrollando la empresa en la zona del Cacaltreu.

Claramente la Ley en su Art. 7 establece las etapas que hacen al Procedimiento de EIA en la actividad minera:

- a) Declaración Jurada Ambiental presentada por la empresa (art. 7 inc a y 8)
- b) Estudio de Impacto Ambiental
- c) Audiencia Pública con los interesados y sus resultados (Art. 7 inc. c y 9)
- d) El dictamen Técnico (art. 7 inc d y 10)
- e) Resolución Ambiental que autoriza el funcionamiento dictada como consecuencia del mencionado cumplimiento de los presupuestos legales.

Consecuencias del incumplimiento:

Sin margen a error el art. 13 determina **"sin el dictamen técnico y la audiencia pública previa, la Resolución Ambiental será Nula"**

c 1.3 Sanciones. Fija el Art. 6 "in fine" como eventuales sanciones ante el incumplimiento las siguientes:

- 1) Suspensión parcial o total de actividades, Caducidad, orden de destrucción, Multas Art. 30
- 2) Nulidad de las actuaciones administrativas que se hubieran iniciado.
- 3) Acciones penales que correspondieran.



SINTESIS MARCO JURIDICO

Concluimos que de acuerdo al art. 41 de la C.N., intervienen las tres jurisdicciones (Nacional, Provincial y Municipal) buscando garantizar el ambiente como derecho publico subjetivo.

Contamos con los presupuestos mínimos de orden público fijados en las normas nacionales, su complementariedad con la legislación provincial e incluso municipal, controlado por los organismos creados al efecto: COFEMA y CODEMA

Los residuos que se generan con la explotación del oro y la plata mediante el sistema de lixiviación con cianuro hace aplicable claramente la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.

La Ley Nacional de Gestión Ambiental de Aguas, es aplicable toda vez que la utilización, estancamiento y eventual depósito de sustancias peligrosas en ellas hace necesario su intervención.

La necesidad de la participación ciudadana garantizada en el art. 20 y 21 de la Ley Nacional 25.675, se ve ampliada en forma complementaria por el art. (art. 7 inc. c y 9) de la ley local 3.266 el cual establece la audiencia pública como mecanismo necesario para la emisión de la Resolución Ambiental.

La ley 24.585 establece la obligación de la autoridad minera a la educación ambiental.

3) Contexto Económico

a) De la actividad en general

Si bien debemos reconocer a la actividad minera como un gran factor de crecimiento económico de una región o un país, ya que de ella se deriva la gran mayoría de los productos de la vida cotidiana, no podemos dejar de resaltar que por sus características y naturaleza extractiva, debe ser una de las actividades mas controladas, toda vez que para su crecimiento utiliza recursos naturales no renovables mediante métodos de gran impacto ambiental y social. En ese sentido extremar los controles, como al apego a la ley y los cánones internacionales, sobre política ambiental es un deber que debemos hacer efectivo.

b) La técnica de extracción

Sus novedosas técnicas actuales han modificado radicalmente la tradicional actividad, permitiendo la rentabilidad de vetas superficiales de bajo contenido de metales preciosos, a partir de métodos significativamente más agresivos al medio ambiente.

Así la explotación de oro a cielo abierto mediante la utilización del cianuro, se realiza luego de la apertura de enormes cráteres en los cerros que alcanzan a 150 hectáreas y 500 metros de profundidad que dinamitadas y removidas, se encuentran partículas menores de oro y plata.

Trituradas las rocas hasta convertirlas en harina, son arrojadas en piletones con la solución de cianuro que al combinarse, facilita su extracción.

Pero con la disolución también se recuperan metales pesados que se encuentran en las rocas, las que se reproducen a través de las aguas superficiales y subterráneas con graves consecuencias en las personas, animales y vegetación de la zona que afecte.

c) La técnica de separación.

El método de separación mediante la lixiviación con cianuro es uno entre los varios disponibles en la actualidad, sin perjuicio de su alto grado de riesgo ambiental que posee, es de gran rentabilidad (80%)

En tal sentido es claro que el cianuro es un término genérico para un grupo de elementos químicos que convierte carbono e hidrógeno, naturales o manufacturados, de este último solo el 8 % se utiliza para el procesamiento de metales mediante el método descripto precedentemente.

Así, defectuosamente utilizado, se convierte en uno de los componentes mas tóxicos que se conoce, letal al contacto directo con los seres vivos.

Puede contaminar tanto el agua como el aire, ser ingerido o aspirado, provocando habitualmente trastornos cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, intestinales o reproductivos, entre otras afecciones.

De tal forma que su manejo indiscriminado o falta de control suficiente, podría ser letal para todo ser vivo.

d) Las consecuencias sobre el medio ambiente

En el entorno:

Afecta directamente al elemento paisajístico de la zona donde se realiza la actividad, a partir de los grandes cráteres y mesetas aplanadas que se generan a partir de los subproductos de la actividad.

En el aire:



Los polvos tóxicos en suspensión, vapores y emanaciones gaseosas del cianuro y dióxido de Azufre, amen del impacto sonoro por las explotaciones, molindas y transporte producen.

En el agua

La alteración en los cursos de agua y lagunas y su alto consumo en las maquinarias, son elementos que deben tenerse en cuenta en esta zona, ya que subsiste únicamente en base a este escaso recurso que podría agotarse. La generación de drenajes ácidos, que suman sus efectos a los del cianuro, disolviendo y transportando metales pesados, podrían suceder aún después de abandonada la mina y seguir contaminando por siglos el lugar.

Debemos tener claro que nuestras economías regionales son sencillas y dependen principalmente de la ganadería y el turismo, por ello cualquier intervención debe ser claramente auditada y / o monitoreada.

Cada paso debe ser meditado y racionalmente decidido, no debemos encandilarnos con riquezas inmediatas, que se traduzcan en contaminación de agua, tierras infértiles, pobreza y dependencia para el futuro mediano.

Así observamos que la problemática planteada se encuentra en una etapa de total incertidumbre, lo que consta, en los numerosos pedidos de información solicitados a esta institución, a los cuales aún es imposible dar una respuesta final sobre el tema.

e) Antecedentes extranjeros sobre esta problemática

Rumania. Con el vertido en el Río Tizsa de una represa que contenía cianuro en las aguas del segundo cauce más importante del país, provocó su contaminación e inutilización como agua potable para 2.5 millones de habitantes, junto a ello murieron 100 toneladas de peces.

España. Un vertido de líquidos contaminantes surgidos de una mina de zinc denominada Los Frailes, dentro de los cuales se encontraba el cianuro destruyó miles de hectáreas productivas y una numerosa matanza de peces.

Sudáfrica. La fuga de cianuro de sodio de una represa en Harmony, que estaba abandonada inundó un complejo habitacional y provocó la muerte de diez mineros.

EEUU.

Dakota. Casi 7 toneladas de desechos de cianuro de sodio concluyeron con la vida marina del río, en la quebrada Whitewood. Un caso similar al expresado sucedió en la mina Cantera de Nevada.

Carolina del Sur. Once toneladas de peces murieron en cercanías a la mina de oro de Brewer, en el río Linches, algo similar a lo ocurrido en Colorado en el río Alamosa.

Si bien esta es información circulante, se vislumbran las divergencias que produce y las cantidades de voces alzadas en contra de la extracción de oro mediante el método de lixiviación con cianuro.

f) Caso Argentina Minera Bajo la Alumbreira. Fuente Daniel Blanco

"La explotación minera de Bajo La Alumbreira, el emprendimiento más importante de Argentina y uno de los más importantes de América Latina, se dijo que iba a traer el progreso ilimitado a los pueblos del interior provincial y a eliminar la desocupación. Nada de eso ha ocurrido.el mensuario catamarqueño *El Ojo en la Tinta* de junio último, plantea que "Tomando como punto de referencia el primer pago realizado el mes pasado por la empresa en concepto de regalías -1.684.000 dólares- a lo largo de los 20 años de vida útil de la mina, Minera La Alumbreira pagará 134.720.000 pesos. Esta cifra es un verdadero chiste para la multinacional ya que representa el 0,00013% de las ganancias previstas para el 2.017, es decir 10 mil millones de dólares. Si la posición de la provincia tiene resultado, la suma por regalías llega a 254.720.000, es decir, el 0,0025% de los ingresos de la multinacional" asimismo informa que " la comisión de Minería de la Cámara de Diputados está impulsando una modificación a la Ley Nacional de Minería, (el artículo 22 bis) por el cual se establece que "a las regalías de la empresa se le restarán cinco categorías de costo, a saber: costos de transporte, flete y seguros hasta la entrega del producto, menos los correspondientes al proceso de extracción del mineral hasta la bocamina; los costos de trituración, molienda, beneficio y todo proceso de tratamiento que posibilite la venta del producto final; costos de comercialización hasta la entrega del producto logrado; costos de administración hasta la entrega del producto logrado menos los correspondientes a la extracción y costos de fundición y refinación" (El Ancafi, 6/12). "en la construcción de la mina se emplearon 1.000 trabajadores catamarqueños y que, de ellos, sólo quedaron con empleo permanente 200, algunos trabajan en la operación y el resto contratado por empresas que tienen alguna vinculación con Minera Alumbreira". Que se aplicó el mismo régimen que aplicaba a los trabajadores chilenos, o sea que no se abonaba las jornadas a los trabajadores que se encontraban enfermos, tampoco se otorgaba licencia por nacimiento



o hijo o casamiento, como también por fallecimiento o para pagar los jornales en caso de feriados nacionales" (ídem). "El sueldo inicial para un aprendiz era de 450 pesos mensuales. El régimen de trabajo era de 12 horas diarias, 14 días corridos y 7 de descanso" (ídem). El *Ancasti* (6/11) da cuenta que ante la queja de un representante empresario de Belén sobre los daños que estaban sufriendo las viviendas por la vibración que producen los enormes camiones del yacimiento, la respuesta fue "A la empresa no puede importarle que el paso de camiones le haga caer las muelas a Doña Rosa y también las viviendas, que, si no se han caído ya, se caerán dentro de poco, cuando lleguen los nuevos camiones, dos veces más potentes que los actuales..." (ídem). "También confirmaron que en el lugar del yacimiento quedará un enorme boquete... y que no resultarían menos dañados el camino que lleva al lugar y el medio ambiente" (ídem). Las denuncias sobre la destrucción ambiental se acrecientan día a día. "A partir de denuncias presentadas por pobladores de Vis Vis y Amanao (en el departamento de Andalgalá), la Fiscalía de Estado investiga a la empresa multinacional Minera Alumbra por posibles filtraciones en el dique de cola, contaminación de la cuenca del río Amanao con desechos químicos y cultivos dañados. Los afectados por la actividad también advirtieron ante el gobierno provincial que la empresa no entrega agua potabilizada como había acordado con los organismos oficiales. Además, la cañería utilizada para extraer mineral suele taponar los ríos y provoca cortes en la ruta provincial (*Clarín*, 7/2). "Aumento de la cantidad de madres solas, denuncias de violencia familiar, incremento de la prostitución, son algunos de los resultados del diagnóstico realizado a vuelo de pájaro por trabajadores sociales que recorren la zona. El jefe del Departamento de Enfermedades Endémicas y Sociales, Héctor Guzmán, dice: no tenemos datos sobre aumento de casos de enfermedades venéreas, pero consideramos a las áreas de impacto de la minería como zonas rojas, donde ahora ponemos mayor énfasis en la prevención. Zonas rojas son aquellas de alta peligrosidad para contraer Sida, blenorragia, sífilis, entre otras" (*El Ojo en la Tinta*, 6/98). "Desde la llegada de la minería, los belichos (vecinos de Belén), tienen a disposición tres nuevos prostíbulos" (ídem)

g) Experiencias Regionales actuales

Que asimismo, y a fin de conocer distintas opiniones en la actividad que nos ocupa, destacamos que en Gral. Roca se realizó el seminario "Minería y Comunicación" los días 3 y 4 de junio que en publicación del medio Noticias de la Costa del día 10 de Junio dice: "...ante la polémica que generan las explotaciones mineras, Alberto Cholito expuso que "no todas las empresas somos iguales. Pero estamos las que hacemos las cosas bien y las que hacen las cosas mal". ...para el empresario "tiene que haber una autoridad ambiental que exija a las empresas, porque si no caemos en el yerro de discutir si tiene que haber o no actividad minera, y eso no puede estar en discusión"...hay que defender la minería porque lleva trabajo y desarrollo allí donde esas cosas no llegan de otra manera" concluyó.

En Gral. Roca esta asentada la empresa "Minera José Cholito e Hijos", desde donde se exporta metonita al mundo, especialmente a Brasil, comenzó su padre en la década del 60 y en el año 2003 certificó bajo la norma ISO 9000 de calidad en el proceso productivo y hoy se encuentra certificado en seguridad laboral y en seguridad ambiental. La empresa que tiene sesenta y siete empleados y contrata trece profesionales como asesores externos para setenta y nueve clientes.

A esta Pyme familiar le preocupa que "se presente a la minería como una actividad depredadora y marginal" y agregan "hay que capacitar en forma permanente al personal y crear mano de obra, allí donde se tiene la actividad".

IV

PREVIO A TODO Evaluación de Impacto Ambiental - EIA

La EIA es un procedimiento administrativo de predicción y prevención de impactos significativos en el ambiente de una decisión pública, habíamos conceptualizado, entendiendo que es un modo de convergencia de la gobernabilidad que sirve para gobernar mejor, atentos a no tomarlo como un "estudio" y transformarlo en un elemento tecnocrático, ya que se basa en los criterios de razonabilidad diciéndonos el COMO razonar y el de legalidad al incorporar los modos formales con el derecho a la participación mediante la audiencia pública y el derecho a la información, perfeccionando el sistema democrático.

Objetivos de la EIA:

- 1) implementación de una política ambiental
- 2) mejora la calidad de las decisiones públicas y favorece una cultura de planificación cooperativa.
- 3) Participación de un gran número de posibles actores protagonistas de su tiempo y espacio.
- 4) Participación de un gran número de disciplinas, ya que ningún contexto está solo, ni temporal ni espacialmente.



5) Participación de gran numero de áreas institucionales.

Audiencia Pública

a) Importancia

La participación en los mecanismos formales de los interesados otorgan transparencia a las decisiones de gobierno y legitimación, en donde con absoluta libertad pueden conjugar las diferentes posturas, interpretaciones sobre los problemas y las posibles soluciones.

El producto es la decisión que vendrá de la interconexión, de ese encuentro de la diversidad en ese espacio de comunicación, resultarán conclusiones útiles que permitirán tener un conocimiento real, veraz, confiable y unificado, en el cual el conocimiento teórico y la experiencia práctica y vivencial del conjunto de la población puedan ser capitalizados y reflejados por las autoridades en la toma de decisiones tan trascendentes para su futuro.

b) Forma y participación.

La autoridad de aplicación deberá establecer el plazo y mecanismo mediante el cual se cumpla con la legislación vigente.

Dicha Audiencia Pública es una parte fundamental del proceso de emisión de la Resolución Ambiental, en donde todo ciudadano, ONGs, comunidades, organizaciones de vecinos, el propio Defensor del Pueblo, etc., se expresara con respecto a la propuesta de la empresa y a las actuaciones desarrolladas por la propia autoridad de aplicación, aportando los argumentos y pruebas que sostengan dichas posiciones.

Para ello, y a los efectos de asegurar el buen desarrollo de la Audiencia Pública, se deberán establecer los parámetros y formas de intervención en la misma, como así también los mecanismos para presentar las propuestas y objeciones que deberán ser respondidas previos al momento de tomar la decisión por la autoridad competente.

c) Intervención de esta institución.

En dicho marco, debemos tener bien en cuenta las atribuciones y competencias otorgadas a esta Defensoría del Pueblo por la ley 2756 que, en su art. 9 inc c), dispone: "*El Defensor del Pueblo tendrá las siguientes funciones... : "inc c) La supervisión del funcionamiento de la administración pública provincial..."*"

Por su parte, el art. 10 de la misma ley establece: "*... podrá instar a las autoridades administrativas competentes, el ejercicio de sus potestades de regulación, inspección o sanción..."*"

En tal sentido es claro que el CODEMA o bien el Municipio de Ing. Jacobacci, son los únicos organismo facultados (Ley 3.266) para entender en el procedimiento que finalmente derivará en la Resolución Ambiental en los términos de ley y esta Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de sus funciones de control, ha constatado la ausencia de un requisito esencial de la Resolución mencionada, toda vez que el propio art. 13 de la misma considera nula ante su falta de realización y es nuestra obligación ponerlo de manifiesto.

Será el CODEMA, como autoridad ambiental quien decidirá la cuestión en forma definitiva, quedando abierta la vía recursiva en sede administrativa y la posterior judicial, para quien o quienes consideren que no se ha respetado la legalidad en el pronunciamiento, sean éstos, la Empresa, los usuarios o sus representantes, incluida la Defensoría del Pueblo limitada a la consideración de la legalidad del procedimiento y en caso de no respetarse, solicitar se restituya la misma, velando por el derecho publico subjetivo que es el ambiente.

Nuestra principal función, en esta etapa y hasta la resolución final es controlar su legalidad, el acceso al expediente, la participación de los interesados, el acceso a la información suficiente, la publicidad de las actuaciones y posteriormente, la consideración de la resolución final emanada de la autoridad competente.

Será entonces, y ante la falta de respuesta suficiente a la fundamentación esgrimida, esta Defensoría del Pueblo deberá tomar como suyo el problema planteado y emitir un pronunciamiento en consecuencia.

Sin perjuicio de ello y con la firme voluntad de colaborar en la de facilitación del proceso, velando en esta institucionalización de un nuevo modo de gobernabilidad y sensibilizar a los protagonistas de esta transformación democrática, es que consideramos que todos debemos liderar el cambio y llegar a ese lugar anhelado de inclusión y pertenencia nacional y planetaria como derecho soberano de los pueblos.

Así habiendo completado una investigación, efectuado el análisis de los contextos que inte-



gran la situación denunciada por los vecinos de la Provincia es que consideramos necesario la convocatoria a una audiencia pública en cumplimiento de la ley 3266 de Procedimiento de Impacto ambiental.

Por ello:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:

PRIMERO: Delegar en la Defensora Adjunta de acuerdo a facultades conferidas por la ley 2759, Art. 11 Inc. i)

SEGUNDO: Recomendar al Consejo de Ecología y Medio Ambiente de la Provincia de Río Negro (CODEMA), como Autoridad ambiental, active los mecanismos a los efectos de realizar la Audiencia Pública prevista en el Art. 7 inc. C y 9 de la ley 3266 de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

TERCERO: Solicitar que el CODEMA nos informe si el Municipio de Ing. Jacobacci no le ha delegado dichas funciones.

CUARTO: Solicitar a la Secretaria de Minería Provincial, como Autoridad Minera, el cumplimiento del art. 22 de la Ley 24.585 de información ambiental, según el punto b) 5

QUINTO: Informe el CODEMA la situación jurídica en que se encuadran las actuales actividades de exploración desarrolladas por la empresa Aqualine SA, hasta tanto se de cumplimiento lo preceptuado por el Art. 13 de la Ley 3266 en cuanto a la Resolución Ambiental, según el punto c.1.2.

SEXTO: Poner en conocimiento de esta circunstancia al Defensor del Pueblo de la Nación, al COFEMA y a la Autoridad de Aplicación según la ley 25.688 de Gestión Ambiental de Aguas, a sus efectos, tomen intervención en las presentes actuaciones, emitiendo los pronunciamientos que a su respecto consideren oportunos.

SEPTIMO: Solicitar al Ente de Desarrollo de la Línea Sur, de acuerdo a la Ley 2583, nos informe si participa de acciones según lo establecido en el artículo 6, incisos b), i), k) y m).-

OCTAVO: Solicitar al Ministerio de la Producción nos informe cuáles son los objetivos y políticas sobre los recursos naturales mineros y su intervención en la fiscalización y control de la calidad en el uso, manejo y explotación de los mismos, de acuerdo a la ley n° 3779, art. 19, Inc. 4 y 7.-

NOVENO: Regístrese, Notifíquese, Publíquese, Cumplido, Archívese.-

En respuesta a nuestra recomendación el CODEMA expresa *"Le informo que el que en virtud del artículo 22 de la ley 3266 de impacto ambiental, el Municipio de Ingeniero Jacobacci no ha delegado facultad alguna a este consejo. Según lo requiere la ley 3266. Asimismo agrega que, TENIENDO EN CUENTA LA ENTIDAD DEL EMPRENDIMIENTO EN CUESTIÓN, EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SERÁ EVALUADO POR EL CONSEJO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE POR EL MAYOR RIESGO PRESUNTO QUE LA OBRA IMPLICA"*

Acto seguido y de manera manifiestamente contradictoria con el párrafo puesto en forma precedente expresa **"en cuanto a lo solicitado -AUDIENCIA PÚBLICA- EL INC. C DE LA LEY 3266 EXIGE LA AUDIENCIA PÚBLICA CUANDO RESULTE PERTINENTE...."**

Como puede apreciarse, en la misma nota el CODEMA destaca la ENTIDAD DEL EMPRENDIMIENTO, que hace necesaria su intervención, y por el otro lado manifiesta que no es tal para el cumplimiento de la legislación vigente, en referencia a la audiencia pública un despropósito realmente.

Vemos, entonces, como se buscan alternativas legales, en base a modificatorias legislativas dictadas con miras a pequeños emprendimientos no degradativos del ambiente para escapar a una obligación legal y legítimo derecho constitucional de los ciudadanos.

Todo ello nos deja un sabor amargo, dado que creemos que la participación ciudadana es enriquecedora, tanto para los funcionarios con la obligación de decidir como para la empresa que deberá extremar los recaudos necesarios para no afectar el ambiente y la audiencia que legalmente se requiere.

En tal sentido se pronunció La Defensoría de la Nación y se pronunció el Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo (ADPRA) realizada en la ciudad de Córdoba, viendo con preocupación la necesidad de articular a nivel interprovincial la cuestión.

Se convino, ante la necesidad de conocimientos específicos, un convenio con el CONICET, a los efectos de que colabore con las Defensorías, acuerdo que la Nación realizó, en colaboración estrecha, habiendo acordado trabajar en conjunto con esta Institución, por medio de una METODOLOGIA PARTICIPATIVA.

Asimismo expuso en el Segundo plenario de la Asociación de defensores del Pueblo, referido específicamente al tema medioambiental realizado en la Ciudad de Neuquén, en donde se planteó la problemática y se solicitó públicamente la opinión al directivo expositor, Dr. Sabsay (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) si conoce algún emprendimiento minero en Argentina que sea ambientalmente sustentable, respondiendo que no es de su conocimiento, igual conclusión que arribamos.

Todo ello sumado a la gran actividad comunitaria, social y universitaria, en pos de un tratamiento serio y responsable sobre el tema que se hace en los medios locales, provinciales y nacionales, dejando de manifiesto que la voces mayoritariamente del pueblo, al día de la elaboración del presente se encuentran manifiestamente en contra de la utilización de cianuro a cielo abierto en nuestra provincia y con un altísimo grado de interés en todo el territorio de la provincia.

Para finalizar y en la oportunidad de hacerlo público, en la actualidad nos encontramos organizando Encuentros formativos, informativos acerca de la problemática del oro provincial, a través de la metodología de Facilitación de Procesos Complejos, preliminarmente planificada para los primeros meses del año próximo, a convocar en la comunidad de Ing. Jacobacci y con la asistencia técnica de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que se notificara por medio de la Resolución correspondiente.

Conflicto por servidumbre de paso

En anteriores informes se incluyó la intervención de la Defensoría del Pueblo en el conflicto entre un grupo de familias de la comunidad mapuche y el propietario de un campo de la zona de Mallín Ahogado que impedía a esos pobladores el pacífico uso de una servidumbre de paso, como lo venían haciendo desde décadas. El tema fue llevado a los estrados judiciales en el año 2002, obteniéndose una sentencia favorable.

Un año más tarde, subsistían los problemas a pesar de la decisión judicial, por lo que la Defensora del Pueblo instó al entonces presidente del CODECI que dispusiera la asistencia de los asesores de ese Consejo a fin de ejecutar la sentencia que resolvió a



favor del pleno goce de la servidumbre de paso reclamada, dado el incumplimiento de dueño del campo a respetar la orden judicial. Si bien con demora, la asesora legal de ese Consejo informó que se había instado tal trámite.

En el presente año, requerimos informes a la empresa VIARSE encargada de la construcción del camino vinculado a dicha servidumbre, indicándose en el mes de junio pasado que ya se habían construido el 80% del camino y que había sido necesario el auxilio de la fuerza pública para poder cumplir con las tareas.

Centro de Convenciones de San Carlos de Bariloche.

Recientemente, en ocasión de la comisión de servicios a San Carlos de Bariloche, integrantes del Foro Permanente de Vecinos nos presentaron y acompañaron un reclamo donde formularon observaciones a la "Evaluación Preliminar del Impacto Ambiental del Centro Cultural y de Eventos" elaborado por el Centro Regional Universitario Bariloche - CURB- a pedido del Municipio. También cuestionan la prolongación del trámite impartido por la Municipalidad al mentado estudio.

Al respecto informamos que en el año 2002, solicitamos informes al EMPROCENTRO que indicó que razones financieras habían demorado el estudio de impacto ambiental, si bien el Ente advirtió que el mismo era ineludible para avanzar en el proyecto.

Se ordenó la reserva de nuestras actuaciones hasta tanto se llevara a cabo dicho estudio, dejándose expreso (Resolución 1.013/02) que **debían asegurarse los mecanismo de control previo que permitan, a su tiempo, formular las observaciones que los interesados y la Defensora del Pueblo estimaran pertinentes.**

Las actuaciones se encuentran en trámite, a la espera de las respuestas a los traslados y pedidos de informes requeridos al Municipio de San Carlos de Bariloche y al Presidente del EMPROCENTRO.

Patrimonio Cultural

Durante el año pasado la Defensora del Pueblo inició actuaciones DE OFICIO en las que ordenó una inspección ocular en el Archivo Histórico de Río Negro y continuó en el presente ejercicio con su intervención enfática en defensa del Patrimonio Cultural depositado en dicho Archivo Provincial, que pertenece a todos los rionegrinos, pues la preservación del acervo histórico de un pueblo significa resguardar su memoria. y proteger su identidad.

La ley provincial 3.656 de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural ratifica tal interés y, al referirse en particular al Patrimonio Documental, lo define en estos términos :

"Son los documentos, planos, maquetas, partidas, piezas filatélicas, libros, actas, mapas, expedientes, manuscritos y otros impresos, las obras literarias, históricas, científicas o artísticas, de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa, los

discos, cassettes, fotografías, material audiovisual y en cualquier otro tipo de registro o soporte, relacionados con la historia de la provincia, que pertenezcan o hayan pertenecido a archivos provinciales, municipales o nacionales, de la Iglesia Católica o de particulares, impresos en la provincia o fuera de ella y que por su rareza y/o valor documental merezcan ser conservados en la provincia".

Esta fotografía que tomáramos el 27 de octubre del año pasado en ocasión de la inspección ocular en las instalaciones del Archivo Histórico Provincial, no dista mucho de la actual situación. Allí vemos que la documentación no estaba preservada en cajas con PH controlado y en estanterías reglamentarias y por el contrario se encontraban apiladas en un lugar con humedad y muy escaso espacialmente.

A partir de nuestra intervención se atendió el pedido de los empleados del Museo que solicitaban aspiradoras, cajas y estanterías cerradas. Efectivamente, un informe de junio del 2004 remitido desde la Agencia Río Negro Cultura detalló sobre la compra de algunos de estos materiales, así como de las refacciones en el edificio para evitar filtraciones de agua y las obras ejecutadas por el DPA en las cloacas. También se



informa que se presentó el Proyecto de Reciclado del complejo que integran el Museo Tello y el Archivo Histórico ante el Consejo Federal de Inversiones y ante la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos.

Aún cuando necesarias, dichas acciones apenas son paliativos y la reubicación del material histórico del Archivo

sigue pendiente. La obra de construcción del nuevo edificio no cuenta a la fecha con financiamiento. Todo esto nos obliga a mantener en trámite las actuaciones a fin de ejercer el control de la marcha de las acciones a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y de la propia Agencia de Cultura para la superación de la problemática que aquí describimos.

Hasta aquí, la última información remitida desde esa Secretaría se refería al ingreso - con fecha 18 de octubre pasado- en el Senado de la Nación del pedido de declaración de Monumento Histórico Nacional del Museo Tello, requisito exigido por la Dirección Nacional de Arquitectura para tramitar el posible financiamiento para la ejecución del proyecto y mantenimiento del actual edificio.

RESOLUCION N° 250/04 DPRN

Viedma, 18 de marzo de 2004

VISTO: El Expediente N° 3425/03, caratulado "DE OFICIO s/ problemas edilicios y de infraestructura que afectan al Archivo Histórico de Río Negro", y

CONSIDERANDO:

I



Que conforme lo ordenado en la Resolución N° 1.294/03, se realizó una inspección ocular en las instalaciones del Archivo Histórico Provincial, oportunidad en la que las autoridades del área de cultura presentes entregaron a la Defensora del Pueblo una copia del proyecto de " Plan Integral de reciclado y construcción del complejo patrimonial Museo Gobernador Tello- Archivo Histórico", elaborado conjuntamente por personal técnico del Museo y del Archivo Histórico y por la Secretaría de Obras Públicas (ver acta de fs. 39/40).

Es incuestionable que la actual ubicación de Archivo Histórico que alberga nuestro patrimonio documental es inapropiada y el acta de inspección, a la que nos remitimos, es elocuente en tal sentido. A modo de ejemplo citamos: instalación eléctrica precaria, escasa ventilación, humedad, proliferación de hongos, falta de espacio, etc..

Como medida preventiva y urgente, los responsables del Archivo señalaron la necesidad de que se les provea de: aspiradoras, cajas adecuadas para contener los documentos (cartón con PH controlado) y estanterías cerradas.

II

Cuando dictamos la Resolución N° 1.294/04, que dio inicio a estas actuaciones de oficio, hicimos referencia a la ley provincial N° 3.656 de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

El espíritu de dicha ley es concordante con el Programa Memoria del Mundo que estableció la UNESCO en 1992, ante la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar la desaparición de grandes porciones de la memoria documental del mundo.

Es que preservar es asegurar el acceso a la herencia documental a la mayor cantidad de personas, ya que a partir de la preservación de un documento también se puede encarar su conversión a otro tipo de soportes (microfilmes, digitalización) que faciliten su consulta sin riesgo para los originales y sin importar dónde éstos se encuentren.

III

Que en virtud de haberse modificado la situación institucional y la titularidad del área de cultura, corresponde remitir los antecedentes de las presentes actuaciones a la Subsecretaría de Cultura, a fin de que se sirva informar las acciones inmediatas y futuras que se encararán para atender la problemática del Archivo Histórico Provincial, y en especial indique si se ha atendido el pedido de provisión de aspiradoras, cajas y estanterías, conforme lo solicitado por el responsable de ese Archivo.

Que asimismo se solicitarán informes a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para que indique si se ha avanzado en el estudio del proyecto de construcción de un nuevo edificio para el Museo Gobernador Tello y el Archivo Histórico.

Por ello:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:

PRIMERO: Solicitar los informes ordenados en el Considerando III de la presente a la Subsecretaría de Cultura y a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

SEGUNDO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico

La Defensora del Pueblo instó una actuación DE OFICIO para solicitar informes a



la autoridad de aplicación de la ley 3041, actuando así en defensa de el interés colectivo a una efectiva preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico. Incluimos aquí el resolutorio que ordenó la investigación y un resumen de la respuesta recibida desde la Agencia Río Negro Cultura.

También tuvimos actuación ante esa autoridad de aplicación en ocasión del reclamo de la Directora del Turismo del Municipio de Gral. Roca, quien solicitó que la Agencia comisionara un profesional para que visitara un lugar dentro del ejido municipal donde se habían hallado restos fósiles, concretamente troncos petrificados.

La respuesta del organismo menciona que se estaba tramitando la contratación de un paleontólogo y reconoce que se hace imprescindible contar con un profesional en la materia para efectuar los relevamientos necesarios ante hallazgos como el citado yacimiento el que, no obstante lo expuesto, había sido registrado.

RESOLUCION N° 902/04

Viedma, 20 de septiembre de 2004

VISTO: El Expediente N° 4841/04, caratulado "DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ solicita informes a la autoridad de aplicación de la ley 3041 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico", y

CONSIDERANDO:

I

Que a fs.1/ 4 se agregan notas periodísticas publicadas en medios gráficos regionales donde se vuelca la opinión de paleontólogos y otros expertos en la materia consultados quienes manifiestan su inquietud ante la falta de controles para prevenir el contrabando de fósiles en la Provincia de Río Negro, así como las dificultades para contar con apoyo financiero para la exploración de yacimientos paleontológicos en la provincia, tanto como para asegurar la preservación de los fósiles extraídos.

Que ya existen antecedentes de intervención de la Defensoría del Pueblo en ocasión de haberse constatado el contrabando de fósiles en el año 1996, que motivó la instrucción de una causa penal en el Juzgado Federal de Gral. Roca. La Defensoría instó por entonces a la autoridad de aplicación de la ley 3041, de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Provincia de Río Negro, el cumplimiento de la misma, así como se recomendó al Poder Ejecutivo la reglamentación de la ley.

Que a pesar del tiempo transcurrido desde aquel pronunciamiento, conservan actualidad las consideraciones volcadas en las Resolución N° 732/97 que aquí reiteramos: "... el nuevo marco normativo puesto en vigencia con la ley 3041 caerá en letra muerta si el Estado no asume una responsable actitud de cumplir con la preservación y defensa del patrimonio arqueológico, paleontológico y antropológico provincial mediante la asignación de los recursos necesarios a tal fin."

II

La ley 3041 publicada el 31 de octubre de 1996, fue finalmente reglamentada por el Decreto 1.150 del 11 de septiembre del 2003, resultando autoridad de aplicación de la misma la recientemente creada Agencia Río Negro de Cultura.

Que el artículo 1° de la ley dispone: "Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico de la Provincia de Río Negro, su conservación, acrecentamiento y recuperación, así como



la regulación de las actividades relacionadas con la investigación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo, como parte integrante del patrimonio cultural provincial."

Que existe un derecho colectivo involucrado en la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, en tanto parte del acervo histórico y cultural de nuestra provincia, que por imperativo legal debe tutelar el Defensor del Pueblo.

Nuestro territorio provincial es inmensamente rico en su patrimonio paleontológico y ello despierta no sólo un interés científico, sino que existen circuitos turísticos desarrollados a partir de los yacimientos paleontológicos, como el Bajo de Santa Rosa, en el Valle Medio, el Parque Valle Cretácico situado al Sur del Río Negro y al sudeste del Embalse Ramos Mexía, los Bosques Petrificados de Valcheta, etc., y de los museos que albergan y exhiben piezas fósiles, entre ellos, el museo "Carlos Ameghino" en Cipolletti, el Museo Municipal de Lamarque y el Museo Municipal de Luis Beltrán.

Que la experiencia indica que a la hora de definir las asignaciones presupuestarias para el financiamiento de las políticas públicas, sin embargo, los gobernantes obligados a asegurar los servicios esenciales del Estado, destinan magras partidas al área de Cultura.

III

Que resultando autoridad de aplicación de la ley 3041 la Agencia Río Negro de Cultura, se solicitará a su titular, se sirva indicar:

1. Qué cantidad de personal especializado en las materias reguladas por la ley 3041 se encuentra bajo la dependencia de esa Agencia.
2. Qué acciones se han tomado a fin de evitar "la circulación, intercambio o comercialización de piezas arqueológicas o paleontológicas no registradas." (art. 21).
3. Cuántas solicitudes de permisos para campañas científicas de exploración, excavación, etc., han sido evaluados y autorizados (art. 22 y ss.) desde la sanción de la ley 3041.
4. Si han sido fiscalizadas dichas campañas. (art.26).
5. Qué acciones lleva adelante esa Agencia en punto a la supervisión, asistencia y colaboración con los museos e instituciones públicas o privadas (art. 30 inc f). Cuánt
6. Si se han recaudado ingresos para la integración del Fondo creado por el art. 31 de la ley 3041.
7. Si la Provincia ha inscripto piezas o colecciones en el Registro del Patrimonio Paleontológico Argentino a cargo del Museo Argentino de Ciencias Naturales "B. Rivadavia".
8. Toda otra consideración que estime oportuno agregar acerca de las tareas vinculadas a la ley 3041 que lleve adelante esa Agencia.

Por ello:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:

PRIMERO: Iniciar las presentes actuaciones de oficio en tutela de los intereses colectivos comprometidos en la Protección del Patrimonio Paleontológico y Arqueológico de la Provincia, y solicitar a la titular de la Agencia Río Negro de Cultura, en tanto autoridad de aplicación de la ley 3041, los informes formulados en el Considerando III de la presente Resolución.

SEGUNDO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-

La Agencia Río Negro Cultura indicó que además de la contratación pendiente de un paleontólogo, se cuenta con dos arqueólogos. En punto a la difusión de la ley se dan disertaciones explicativas en Escuelas de Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía provincial, en Viedma y en Sierra Grande, además de visitas las localidades donde se reúne a los intendentes, policía y jueces de paz. Se brindó un exhaustivo detalle de las



campañas científicas desde la sanción de la ley 3041, indicándose las entidades organizadoras, los sitios de trabajo y los veedores provinciales que intervinieron.

El informe de la Agencia Río Negro Cultura, en su calidad de aplicación de la ley 3041, es satisfactorio en punto al deber de colaboración con la Defensora del Pueblo pues contesta con amplitud los puntos requeridos, pero además hace observaciones y propuestas que serán analizadas por esta Defensoría del Pueblo a fin de elaborar futuras recomendaciones a otras autoridades involucradas en la difusión de acciones tendientes a la toma de conciencia de toda la población sobre el valioso acervo arqueológico y paleontológico que nuestra Provincia posee.



CAPITULO II

SEGURIDAD

Actuaciones de la Policía de Río Negro

Este año se ha trabajado sobre 37 expedientes relacionados con la actuación policial. De ellos 22, refieren situaciones de presunto maltrato policial.

También se recibieron presentaciones de personal de la policía que se sentía afectado en virtud del trato y consideración que se le brindaba dentro la fuerza.

Se observa que es costumbre en las contestaciones de la Policía un informe pormenorizado de todo el hecho acontecido. Así mismo se comprueba de acuerdo a la documentación que remiten, que existen denuncias sobre las cuales la misma fuerza da inicio a las acciones judiciales.

En todos los casos la respuesta del Organismo es puesta en conocimiento de los promotores, quienes, excepcionalmente, han manifestado alguna opinión en contrario a las actuaciones y conclusiones de la instrucción llevada a cabo por la Institución Policial.

Todos los expedientes los continuamos trabajando, de acuerdo al artículo 26 de la ley 2756, y más allá del silencio de los promotores después de ser notificados del informe producido por el Organismo Policial.

Veamos algunos expedientes:

Nº 4988/04, cuyo promotor denuncia que al momento de ser interceptado por una patrulla policial, cuyos integrantes procedieron a identificarlo, recibió una trompada en la cara".

La respuesta enviada por el destacamento... con fecha 10 de septiembre, dice en la declaración del oficial a cargo de aquella patrulla "Que encontraron en la intersección de las calles... al promotor del expediente quien iba indocumentado, pero que por sus dichos se estableció su nombre y apellido como así también su domicilio y que luego se siguió con la tarea de prevención...." En ningún párrafo se hace mención a la presunta "trompada"

Nº 4255/04 cuyo promotor vecino de la localidad de... denuncia una falsa acusación, allanamiento a su domicilio y todas las humillaciones que le trajo aparejada esta situación.

Producido el informe de la unidad dese explica al señor jefe de la Regional I los hechos ocurridos, en una parte de ellos hace mención a que la denunciante " se encontraba circunstancialmente en una oficina de esa comisaría, desde donde lo vio pasar (al denunciante en estas actuaciones) y confirmó que era el sujeto que la había agredido.

Luego el comisario a cargo de la Comisaría de ..., cuenta de otras acciones llevadas



adelante por la supuesta víctima de este caso, pero acerca de la denuncia del promotor del expediente, no dice absolutamente nada.

Simplemente y al final de su informe muy escuetamente termina con que no hubo allanamiento alguno.

El ciudadano, promotor del expediente, hoy tiene en sus manos un papel, que dice:

Provincia de Río Negro
Poder Judicial
Juzgado de Paz de...

En ...Departamento ...Provincia de Río Negro, a los 08 días del mes de junio de 2004, siendo las 10:00 horas, comparece ante este Juzgado de Paz, previamente citado y a la audiencia que fuera señalada, el señor; Alfredo, a quien en este acto le hago saber, de mi cometido, leyéndole íntegro y a viva voz el Oficio N° 2890/04 en autos caratulados "... s/ lesiones leves, expte. N°710/04, que se tramita por ante el Juzgado de Instrucción Penal N° 4, Presidencia a cargo del Dr. Pedro Rubén Funes, Secretaria N° 8. Resolución: Viedma, 20 de mayo del 2004.-AUTOS Y VISTOS...DE LAS QUE RESULTA...Y CONSIDERANDO:...RESUELVO: 1) Dictar el sobreseimiento total a favor del prevenido, ...ya filiado en relación al hecho que se le atribuía, en orden a las consideraciones expuestas(CCP307 inc.1° 2° supuesto) -2)Declarar que la iniciación del proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubiese gozado el imputado.- Pedro Rubén Funes.-Juez.-Dra. Itziar Soly- Secretaria. No siendo para más, dí por terminado este acto, firmando la comparencia previa lectura de lo actuado, ante mí que CERTIFICO.

FIRMADO ...JUEZ DE PAZ

Conclusión: Así las cosas, como se entenderá, nos queda una incómoda sensación ante este tipo de denuncias, las respuestas, y luego el silencio de los denunciantes.

Otras cuestiones se refieren al funcionamiento de la Institución Policial hacia adentro, por ej. expediente:

N° 3926, cuya promotora, viuda de un oficial fallecido hace muy poco tiempo, realiza un reclamo para la recategorización de su marido, y antes de que suceda este lamentable desenlace.

A continuación expondremos los argumentos de la promotora, como así también la contestación de la Jefatura de Policía.

- 1) que su marido ostenta el grado de Subcomisario de la Policía de Río Negro, hace exactamente 9 años.
- 2) sostiene que su marido cumplió a lo largo de su vida con todos los destinos asignados, y que desempeñó con honorabilidad su función.
- 3) Que en uno de esos destinos asignados, se le detectó su enfermedad (cáncer).
- 4) Que en el año 2000 él debería haber ascendido al grado de Comisario y que por lo



tanto en enero del 2003, reclamó por ese ascenso.

5) Que esta situación termino desmoralizando a su esposo, con el agravante de que luego contrae una severa enfermedad.

6) Que además ese último traslado a Gral. Conesa, entorpeció significativamente los planes de estudio de sus hijos.

7) Que en el año 2002 su esposo reclamo el ascenso, pidió una audiencia con el Secretario General de la Policía, la cual nunca fue concedida.

8) Finalizando lo informado, la promotora comunicó a esta Defensoría que su esposo es paciente oncológico y es un paciente desnutrido en grado II.

Ante todo lo expuesto la Jefatura de Policía contesta lo siguiente:

1) Que el mencionado nunca pidió el ascenso y que por lo tanto no existía tramitación alguna al respecto.

2) Que el primer ascenso lo perdió por falta de vacantes, obtuvo el orden de mérito 8º y las vacantes cubiertas resultaron 7.

3) Que para el tratamiento del ascenso posterior el mencionado oficial no fue tratado en la junta de calificación por tener más de 60 días corridos acumulados por enfermedad, no motivados por los actos de servicio.

El reglamento se cumplió.

Expediente n° 5842 / 04

Este es de reciente inicio y si bien se encuentra en trámite, ha sido debidamente analizado conjuntamente con el Comisario Inspector Silva, a cargo de la Dirección de Personal de la policía provincial en su despacho de Jefatura, quien dada la gravedad del tema, también fue tratado con el Jefe de la Unidad Regional III, con asiento en la localidad de Choele Choel.

En esa fecha también concurre a esta Defensoría, un ciudadano de Luis Beltrán, quien confirmó todos y cada uno de los dichos de la promotora del expediente y relata también, según sus dichos, lo que entiende como cuestiones gravísimas del accionar policial. El mencionado ciudadano se comprometió a enviar a la brevedad la mayor cantidad de denuncias posibles sobre esta problemática.

Asimismo, el día 2 de diciembre la promotora del expediente, escribe en la sección carta de lectores del Diario Río Negro una denuncia del mismo tenor y que obra en las actuaciones, lo que pone en evidencia que no obstante el grado de desamparo, la sensación de desprotección, la impotencia, y el miedo, que dice sentir, está dispuesta a proteger a su familia reaccionando contra la injusta realidad que le toca vivir.

Es muy difícil para nosotros como Institución lograr el equilibrio cuando de dirimir estos temas se trata, sobre todo por que los actores son rionegrinos, unos con uniforme y otros no, lo cierto es que las instituciones deben dar el ejemplo, en base a estos se desarrollan las sociedades.

Si de 100 denuncias a la policía por presuntos malos procedimientos, la Institución sugiere que no hay ningún caso cierto, estamos en serios problemas, y si de 100

	Expedientes Policía	
3892/03	S/invest.por que fue det.e interrogado en SAO	solucionado
3926/04	Solic. Recat.lugar de trabajo(policia)	En tramite
3999/04	S/denuncia por presunta brutalidad policial	solucionado
4036/04	Su denuncia	solucionado
4048/04	Su denuncia presunta desaparicionde su hijo	Solucionado
4063/04	Se investigue fallecimiento de su hermano	solucionado
4158/04	S/ presunto maltrato policial	solucionado
4208/04	S/ reclamo por no poder radicar denuncia	solucionado
4167/04	Denuncia pres.desp.tierras.queja policia I.Jaco.	En tramite
4212/04	S/denuncia presunta golpiza policial	solucionado
4223/04	Rec. Por atención de su hijo	solucionado
4238/04	S/presunta agresión policial	solucionado
4255/04	Solicita se investigue por presunta falsa acusación	Solucionado
4266/04	Presunta.golpiza e inaccion policial	solucionado
4326/04	Solicita atención por hijo detenido	Solucionado
4348/04	S/denuncia por robo	solucionado
4452/04	S/ presunto abuso de autoridad B° Guido (de oficio)	solucionado
4477/04	S/ presunto maltrato policial	Solucionado
4582/04	S/DENUNCIA POLICIAL	Solucionado
4663/04	S/ presunto maltrato policial	solucionado
4687/04	S/denuncia persecucion	solucionado
4690/04	S/ presunto abuso policial	solucionado
4735/04	S/presunta agresión policial	solucionado
4870/04	Denuncia presunta persecución policial	solucionado
4871/04	Denuncia presunta tortura policial	solucionado
4787/04	Denuncia presunta golpiza policial B° 20 de Junio	solucionado
4988/04	Denuncia presunta agresión policial	En tramite
5126/04	Su reconsideración situación laboral policial	En tramite
5257/04	S/denuncia presunta persecución policial	En Tramite
5323/04	Denuncia detención sin causa	solucionado
5337/04	Denuncia presunta agresión policial	solucionado
5430/04	Denuncia presunto maltrato policial	solucionado
5502/04	Su denuncia	En Tramite
5506/04	S/accidente de trabajo	En Tramite
5535/04	S/ cuestiona accionar policial	En Tramite
5660/04	Denuncia presunto mal accionar policial	En Tramite
5719/04	Denuncian presunto maltrato policial	En Tramite

CONSEJO DE SEGURIDAD LOCAL

En el transcurso del año se ha participado en las reuniones del Consejo de Seguridad local, sobre todo en las etapas previas a su gestación definitiva, pudo observarse, que los reclamos de los vecinos en líneas generales, coinciden en los distintos barrios de la ciudad, violencia juvenil, alcoholismo, violencia familiar, inseguridad general y droga, pero parece que de eso no se habla...

Ante el planteo de la droga, los vecinos comenzaron a expresarse, claro indicador de una asignatura pendiente en la evaluación global del problema de la seguridad.

No quiero dejar de mencionar mas allá de los interrogantes planteados la colaboración prestada a esta Defensoría por dos Comisarios Inspectores, a cargo de las Direcciones de Seguridad y Personal de la Policía de la provincia de Río Negro a la fecha de este informe, como así también del Subcomisaario de la Dirección de Seguridad.

También vaya un agradecimiento para todo el personal subalterno que sirvió de enlace en las distintas funciones, entre esta Defensoría y los oficiales citados.

B CONDICIONES DE DETENCIÓN EN CÁRCELES Y COMISARÍAS

Nuestra actuación con relación a la defensa de los derechos de las personas alojadas en las

unidades carcelarias de la provincia ha sido constante. En anteriores informes fuimos dando cuenta del carácter de nuestras recomendaciones, así como de las visitas e inspecciones que realizamos en distintas oportunidades a las cárceles rionegrinas.

Los internos, además de dirigirse por escrito, tienen un canal de comunicación directo con la Defensoría del Pueblo por vía de los llamados telefónicos por cobro revertido. Esto nos permite tomar un conocimiento casi inmediato de las situaciones que motivan sus denuncias o pedidos de intervención.

En el presente año, la violación de los derechos humanos de las personas alojadas en la Alcaidía de Gral. Roca tomó nuevamente estado público y trascendió incluso hasta esferas internacionales pues el caso fue expuesto ante la ONU. Nuevas voces de denuncia se sumaron a las habituales intervenciones de la Defensoría del Pueblo.

Recordemos que la situación es ya crónica y este año realizamos una visita a la Alcaidía de Gral. Roca cuando tomamos noticia de que un grupo de internos estaba manifestándose con una huelga de hambre. Recientemente recibimos respuesta de la Fiscal a cargo de la investigación ordenada por el tribunal donde tramita el habeas corpus suscripto por 170 de esos internos. En la misma se detalla el resultado de las diligencias practicadas y se indica que se tomó declaración a la totalidad de los promotores de la acción. La Fiscal también remitió copia de la acción pública presentada ante el Juez de Instrucción N° 2 de Gral. Roca, contra policías que integran el personal de esa dependencia denunciados por los internos por vejaciones y malos tratos. A la fecha, no se registran novedades en el trámite de dichas denuncias penales

Se agregó también el informe elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el que no incorpora hechos nuevos a las actuaciones desde que describen situaciones previamente denunciadas por esta Defensoría del Pueblo, si bien se constituyó en una importante contribución para la toma de conciencia de las autoridades, provinciales y del Gobierno Nacional, que también ha declarado su propia emergencia penitenciaria.

Recordemos que el actual hacinamiento de nuestras cárceles se debe a que están pobladas por mayor número de condenados que los registros históricos, que ya no son recibidos por el Servicio Penitenciario Federal debido al propio colapso de las unidades que de éste dependen.

El pedido de informes ordenado por la **Resolución N° 1.183/04** (que se incluye en este capítulo al Ministerio de Gobierno, aún se encuentra pendiente de respuesta, si bien dentro de los plazos legales para contestar dispuestos por el art. 11 inc. a de la ley 2.756. Requerimos, entre otros puntos, se brindara la siguiente información:

- Detalle de la obras de reparación de los edificios carcelarios dispuestas en el marco de la ley 3877.
- Plazo de terminación de la obra de la Alcaidía de Viedma y capacidad disponible en la misma.
- Si se han realizado cambios en la conducción y/o del personal de la Alcaidía de Gral. Roca y, en su caso, si se instruyeron actuaciones administrativas ante las denuncias contra los mismos.

- Si se ha mejorado la comida y la asistencia sanitaria en esa Alcaidía
- Si se evalúa el concepto de los internos a los fines del beneficio de las salidas transitorias.
- Estado de avance se encuentra la conformación de los gabinetes criminológicos.
- **Alcances del Convenio de Cooperación suscrito con la Nación en la temática penitenciaria.**

También solicitamos a la Dirección General de Derechos Humanos, en razón de su competencia específica en la protección de los derechos fundamentales, que informara acerca de sus intervenciones ante las reiteradas denuncias de malos tratos, falta de asistencia médica y psicológica, desatención de internos enfermos de SIDA, reducción de horarios de visitas, etc. Aún no se incorporó la respuesta de ese organismo.

El Subsecretario de Justicia, Asuntos Penitenciarios y Ejecución Penal por su parte, respondió la requisitoria ordenada por la Resolución 1.183/04 informando que se tramita ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos la ampliación y remodelación de la Alcaidía de Gral. Roca y un nuevo edificio para 180 internos en Cipolletti, por lo que la Defensoría del Pueblo solicitó informes ampliatorios al organismo executor de dichos proyectos. Asimismo se indicó que la finalización de la obra de la Cárcel de Viedma se estima para el 1º de marzo del 2005, con capacidad para 240 internos.

Desde la cartera de Gobierno se manifestó que no se realizan las evaluaciones de concepto por la falta de Gabinetes Técnicos Criminológicos y de Consejos Correccionales y que está próximo a concluir el trámite del dictado un decreto que regula esos institutos. En consecuencia, y dentro del marco de la ley de emergencia penitenciaria, se tramitan contrataciones de personal técnico y profesional a tal efecto.

En cuanto al convenio con la Nación, por el que también requerimos precisiones, se indicó que se limita a la capacitación de personal penitenciario. Se agregó que se están elaborando dos instrumentos legales: la implementación - vía decreto- del servicio penitenciario que crea la ley 3008 y el Proyecto de Ley Orgánica de Personal de dicho servicio para ser remitido a la Legislatura. Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos el control del cumplimiento de las acciones comprometidas aquí informadas.

En atención a las pautas que nos impusimos para el presente Informe Anual, podemos decir que esto es apenas una síntesis de nuestra actuación pues, reiteramos, estamos en permanente contacto con internos y/o sus familiares, con funcionarios judiciales, con el Jefe de la Unidad y sus superiores de la Fuerza Policial y con las áreas del Ministerio de Gobierno responsables de Seguridad y Asuntos Penitenciarios.

RESOLUCION N° 1.183/04

Viedma, 1º de octubre del 2004

VISTO: El Expediente N° 5.188/04, caratulado "INTERNOS DE LA ALCAIDÍA DE GRAL. ROCA s/ denuncia", y

CONSIDERANDO:

I

Que llegado a conocimiento de la Sra. Defensora del Pueblo que un grupo de internos de la Alcaidía de



Gral. Roca se encontraban en huelga de hambre, se dispuso la comisión de servicios de la Sra. Defensora Adjunta el pasado 27 de agosto, para que se constituyera en el lugar a fin de tomar in situ testimonios de los detenidos allí alojados. La funcionaria comisionada mantuvo entrevistas con los internos, solicitó informes al Jefe de la Unidad y recorrió las instalaciones. En todo momento trató de persuadir a los internos que cesen con la huelga, al tiempo que instó que recibieran control y asistencia médica.

Que además de la medida de protesta del ayuno, 173 internos promovieron acciones ante la Cámara II en lo Criminal de Gral Roca dado el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención (Autos: " LEON, Miguel Ángel y otros s/ Habeas corpus" - Expte. N° 2.644/04-).

Que con fecha 31 de agosto, se estableció contacto con la Fiscal a cargo de la investigación derivada de las citadas acciones, quien indicó que se estaba tomando declaración a cada uno de los promotores del amparo y que una vez concluidas las actuaciones ordenadas por la Cámara, ampliaría la información requerida. Al mismo tiempo se transmitió a la funcionaria judicial el tenor de las quejas de los internos que reclaman más presencia de los miembros de la Justicia.

Que a fs. 1/4 se incorporan cartas dirigidas a la Defensora del Pueblo por los detenidos y a fs. 7/15 obra acta que recoge otros testimonios. De ello se concluye que a través de la huelga de hambre y de la acción de habeas corpus, entre otras demandas, los internos peticionan:

- * Que se aseguren mayores garantías de acceso a la Justicia.
- * Que cesen los malos tratos, especialmente en las requisas.
- * Que tengan mejor atención médica y psicológica.
- * Que no restrinjan los horarios de visitas.
- * Que se les enseñen oficios o puedan prestar tareas.
- * Que se otorgue el beneficio de salidas transitorias a quienes reúnan las condiciones de ley.
- * Que sea nuevamente traído a la Alcaldía un compañero trasladado a una Comisaría de Allen.
- * Que intervenga el Comisario Capsi - ex Jefe de esa Unidad- como mediador .

Que por otra parte cuestionan al Jefe de la Unidad porque " no le concede audiencia a nadie, no se preocupa por el presupuesto, ni el abastecimiento de la alimentación y medicación de la población, y a los celadores quienes " se han dedicado a restringir, prohibir, reprimir y castigar, todo lo que nos pueda mortificar y ocasionar una doble angustia convirtiendo así a esta unidad súper poblada en un infierno" (sic. fs.1).

Que denuncian también la "pésima alimentación" compuesta de guisos de "fideos recocinados que llegan a ponerse ácidos" y, si tienen problemas gastrointestinales, tampoco reciben una dieta adecuada: " no nos dan siquiera una papa (se roban todo)" (sic). Agregan que tampoco se permite que un interno avance favorablemente en su informe de conducta ya que no se puede hacer tareas: huerta, limpieza del patio, etc.

Que se recibieron también pedidos de familiares de los internos que en forma coincidente solicitan mejoramiento de las condiciones de detención, especialmente: atención médica y psicológica, rehabilitación para adictos a drogas , trabajo, aprendizaje de oficios.

Que el Jefe de la Alcaldía, por su parte, manifestó que :

- * Hay un total de 470 internos, 8 son mujeres y la capacidad es para 170.
- * Prestan funciones 130 agentes, en tres turnos.
- * Los detenidos comen un guiso de "rancho de pollo, zapallo, papa y cebolla". No hay nutricionista.
- * La Alcaldía cuenta con un presupuesto de \$23.000 mensuales que se afectan a pagar deudas de meses anteriores. Se destina a comida y atención del interno (medicamentos) y otra parte a reparación de móviles y gastos del edificio. Los fondos no llegan a tiempo.
- * Necesitan un presupuesto mayor, sólo cuenta con \$0,80 por interno mientras que el Servicio Penitenciario Federal asigna \$18 por cada uno.
- * Para tercerizar la provisión de comida se presupuestaron \$120.000.
- * Los internos sólo cuentan con taller de folclore y no se capacitan en oficios.
- * Las malas condiciones edilicias también afectan a las garitas y de doce existentes, sólo se encuentran en condiciones cinco de ellas.

Que ante la gravedad de la situación vivida por la comunidad carcelaria, se mantuvieron continuas reuniones con Legisladores y autoridades del Poder Ejecutivo, especialmente con el Secretario de Seguridad y Justicia y con el Subsecretario de Justicia, Asuntos Penitenciarios y Ejecución Penal, quienes además de brindar un detalle de los informes técnicos elaborados y adelantar algunas de las acciones previstas para superar la crisis en nuestras cárceles, como la creación de gabinetes criminológicos, obras de infraestructura, etc., hicieron entrega del proyecto de ley sobre Declaración de la Emergencia del Sistema Penitenciario en Río Negro agregado a fs. 16/19 que, posteriormente el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura, y que fuera sancionada en única vuelta (art.143 Constitución Provincial) el día 30 de septiembre.

II

Que la problemática que aquí nos ocupa ha sido motivo de distintas intervenciones por parte de la Defensora del Pueblo. Así, en el Informe Anual del año 2002, que abarcó nuestro primer año de gestión, observábamos que:

"La gravedad de la problemática carcelaria en la Provincia de Río Negro es crónica, y recurrente también la violación de normas de la Constitución Provincial y Nacional y de los Tratados y Convenciones Internacionales incorporadas a nuestra Carta Magna por la reforma de 1994. La indignidad y el abandono de quienes están privados de su libertad, y la ineficacia de nuestro sistema carcelario como instancia de rehabilitación, convierten a nuestras cárceles en simples depósitos de personas sin otro destino que la marginalidad.

Llegada a instancias del Superior Tribunal de Justicia las denuncias de estas violaciones, nuestro máximo Tribunal ordenó al Poder Ejecutivo en junio del 2001, y ratificó y amplió en otro pronunciamiento del presente año, la urgente mejora de las condiciones de detención de los internos de la Cárcel de Encausados de General Roca y estableció plazos para la elaboración de un programa técnico y financiero de inversión y gasto con las correspondientes previsiones presupuestarias dentro de la Ley 3466 de Emergencia Económica Financiera del Estado, así como para implementar definitivamente el Servicio Penitenciario Provincial.

En el presente año visitamos en distintas oportunidades las Unidades Carcelarias de San Carlos de Bariloche y Gral. Roca, una de esas inspecciones fue realizada en el marco de la amplia convocatoria cursada por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, en la que participaron representantes del Poder Ejecutivo, Legisladores, Concejales, Magistrados y Funcionarios de distintas Circunscripciones Judiciales y la Prensa.

La decisión de tal llamado del órgano judicial obedeció a las insuficientes respuestas del Gobierno Provincial a las mandas de los fallos citados. Por nuestra parte, ya habíamos solicitado en junio de este año un amplio informe sobre el avance de las obras encaminadas a dar satisfacción a las necesidades de la población carcelaria en consonancia con lo dispuesto por la justicia

Ello por cierto, no alcanza para superar el colapso de esa Alcaidía, la que está colmada en su capacidad tanto por la insuficiencia edilicia como por la interrupción de la regular recepción de condenados por parte del Servicio Penitenciario Federal en los últimos años, jurisdicción que ha declarado a su vez la emergencia penitenciaria nacional, en razón de sus propias limitaciones para alojar más internos."

III

Que las deplorables condiciones del deterioro edilicio, hacinamiento y deficiencias sanitarias de nuestras unidades carcelarias, colisionan groseramente con las garantías y derechos de los detenidos que consagran nuestras normas constitucionales y los tratados internacionales. Recordemos esos textos legales:

"Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice" (Artículo 18 de la Constitución Nacional).

"La Provincia promueve la creación del sistema penitenciario provincial. Las cárceles tienen por objeto la seguridad pública y no la mortificación de los internados; son sanas y limpias y constituyen centros de enseñanza, readaptación y trabajo. La



reglamentación permite visitas privadas con el fin de no alterar el mundo afectivo y familiar, y ayudar a la recuperación integral del detenido. Todo rigor innecesario hace responsables a quienes lo autorizan, aplican, consienten o no lo denuncian. (Artículo 23 Constitución de Río Negro).

"Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad." (Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. XXV, última parte).

"Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano... Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados." (Convención Americana sobre Derechos Humanos art. 5)

"Todas las personas privadas de su libertad serán tratadas con humanidad y con el respeto inherente a la dignidad de la persona humana." (Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, Artículo 10)

"Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos." (Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas -Resolución N° 45/111 del 14.12.90 - Principio 1).

"Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicar". "Los locales destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación." ("Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos", Nros. 8 y 10, Naciones Unidas)

IV

Que el último informe de la ONG "Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina", que inspeccionó en el año 2003 cárceles federales y provinciales revela que la situación de los adultos detenidos en el sistema penal argentino no ha registrado mejorías en relación a lo informado en el año 2002, y destacan las problemáticas de superpoblación y de demoras en las causas judiciales, lo que conlleva a que existan altos porcentajes de detenidos procesados.

Que esto es conteste con los datos y fundamentos que inspiran el Plan de Infraestructura Penitenciaria 2004, que el Gobierno Nacional propició con el dictado del Decreto 1.183/2003, donde se reconoce la insuficiencia de plazas en el Servicio Penitenciario Federal - superado en un 12/15% -, lo que fue convirtiendo a las comisarias y a otras dependencias de las Fuerzas de Seguridad en virtuales alcaidías o cárceles. Agregan las consideraciones del Decreto, que el desborde de cárceles no sólo viola los preceptos constitucionales de respeto a la dignidad de los detenidos, sino que contribuye a la violencia, a las fugas y a los motines.

Que en ese mismo sentido se manifiesta el Poder Ejecutivo Provincial en la nota de elevación del Proyecto de Ley de Declaración de Emergencia Penitenciaria en Río Negro, donde dice:

"La Secretaría de Seguridad y Justicia del Ministerio de Gobierno de la Provincia ha informado del grave estado en que se encuentra el sistema penitenciario dependiente de la Policía de la Provincia, tanto en el aspecto de las construcciones existentes como en el de recursos humanos disponibles."

"Particularmente, la Cárcel de Encausados de General Roca adolece de múltiples deficiencias, originadas en la falta de espacio para albergar a los más de cuatrocientos internos allí alojados y en las deficiencias constructivas que se observan, fundamentalmente por el mal estado de las instalaciones sanitarias y de agua. Ambas circunstancias configuran un cuadro de hacinamiento y pésima calidad de vida, haciendo devenir en ilusorio el cumplimiento de las prescripciones legales emanadas de la Constitución de la Provincia y las Leyes N° 24.660 y 3.008."

"En similar situación, se encuentran las tres restantes cárceles de encausados provinciales, fundamentalmente en cuanto a su



capacidad, ya que todas poseen en promedio más del 80% de la población originalmente proyectada; el otro punto en común son los aspectos funcionales de estas unidades, que permiten situaciones de extrema peligrosidad tanto para los internos, como para los empleados, como así también, una latente posibilidad de fugas."

Que el P.E. también reconoce que: "El incremento explosivo de la población carcelaria ha generado problemas en lo atinente a la provisión del racionamiento y a la asistencia sanitaria".

La Ley 24.660 dispone:

Artículo 1°.- La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada.

Artículo 3°: "La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, estará sometida al permanente control judicial. El juez de ejecución o juez competente garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley".

Que el artículo 16 y siguientes de la mencionada ley, regulan lo relativo a las Salidas Transitorias. Entre otras condiciones para la concesión de ese beneficio por parte del juez competente, se requiere: "Poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación. "Merecer, del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas o el régimen de semilibertad puedan tener para el futuro personal, familiar y social del condenado" (apartados III y IV del art. 17)."

Que en consonancia con la ley nacional, la ley 3.008 provincial establece el régimen de ejecución de penas privativas de la libertad impuestas a condenados, así como el régimen de detención de quienes se encuentran sometidos a proceso penal.

Sigue pendiente en nuestra Provincia la implementación de muchas de las disposiciones de esa ley, tal como la creación de establecimientos penitenciarios para condenados y la separación absoluta de los menores entre los 18 y 21 años con los mayores (art. 32). También se observan incumplimientos en cuanto a los aspectos mínimos con que deben contar los establecimientos, de acuerdo al artículo 30 de la ley 3.008: personal idóneo (inc. a) secciones de trabajo que aseguren la plena ocupación de los internos (inc.c), biblioteca y escuelas en los niveles obligatorios (inc. d), gabinete técnico criminológico (inc. e), desarrollo de programas recreativos adecuados (inc. g), etc.

Asimismo la ley prevé las condiciones de acceso a las salidas transitorias, requiriéndose junto con los tiempos mínimos de ejecución, el concepto favorable del gabinete técnico criminológico.

Tampoco se han creado los **Juzgados de Ejecución Penal** que la ley dispone sean con sede en *cada una de las circunscripciones judiciales donde hubiere, al menos, un establecimiento carcelario dependiente del sistema penitenciario provincial (art. 41) y con competencia para asegurar, controlar, vigilar, mantener, tramitar, resolver, efectuar, autorizar, disponer y ordenar todas las medidas que regulan el funcionamiento del sistema implementado (art. 40).* Dichas funciones, transitoriamente, las cumplen los Tribunales de Sentencia.

V

Que se encuentran en trámite actuaciones iniciadas De Oficio por la Defensora del Pueblo - Expte. N° 4843/04- en las que se investiga la asignación de personal en las cárceles rionegrinas, y en particular, los porcentajes de éstos que han recibido capacitación en la especialidad penitenciaria.

De los informes evacuados por la Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento de la Policía surge que del personal destinado a las unidades carcelarias un 35% ha sido capacitado y el resto cuenta con experiencia en el desempeño de esas funciones. Los cuadros superiores se forman en un instituto del Servicio Penitenciario de Córdoba, mientras que se acompañó el Plan de Estudio para Agentes Penitenciarios, quienes obtienen el título de Perito Auxiliar en Relaciones Humanas (cf. Informe N° 441/ 04 D5-DA,

agregado a fs.18/19 del Expte. N° 4843/04 DPRN)

Que un año atrás, también tramitamos De Oficio (Expte.N° 3473/03) una investigación vinculada a la interrupción de la provisión de carne en la Alcaldía de Gral. Roca. Se observó que esta problemática se originaba no ya en el monto del presupuesto asignado a la Unidad, sino en cuestiones de orden burocrático que conllevaban demoras en la rendición de las compras y liberación de nuevas partidas. Ello no obstante, los datos ahora recabados dan cuenta de una baja ostensible en la calidad de los alimentos que se elaboran en la cárcel de Gral. Roca.

Que es ocioso manifestarnos una vez más con recomendaciones que a esta altura resultarían redundantes, pues no es la primera vez que intervenimos en la temática. Que además la gravedad de la problemática penitenciaria ha sido abordada desde los tres Poderes del Estado con distintas iniciativas conforme a sus competencias. Que siendo así, corresponde que ejerzamos el control del cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo en el marco de la Emergencia del Sistema Penitenciario declarada por ley.

Que en atención a que las diligencias que en forma personal se realizaron desde la Defensoría del Pueblo permitieron poner en conocimiento de las autoridades competentes todas las denuncias formuladas por los internos, y dada la reciente sanción de la ley de Emergencia Penitenciaria citada, la que prevé mecanismos excepcionales para agilizar la toma de decisiones conducentes a dar respuesta a la crisis apuntada, es oportuno reservar las actuaciones durante 30 días a fin de solicitar, vencido ese plazo, informes al Ministerio de Gobierno vinculados a la implementación de las medidas de mejora estructural del sistema penitenciario que se hubieren dispuesto a partir de la declaración de emergencia, atendiendo no sólo las relativas a los edificios carcelarios, sino también aquellas vinculadas al personal penitenciario y demás acciones sobre tratamiento y asistencia de las personas privadas de su libertad alojadas en dichos establecimientos (régimen de visitas, alimentación, atención sanitaria, conformación de gabinetes criminológicos, Convenio de Cooperación Técnico-científico suscripto con la Nación, etc.).

Que en idéntico plazo de 30 días, se dispondrá la nuevos informes, en carácter de colaboración, a la Fiscalía y Tribunal intervinientes en las acciones de habeas corpus promovidas por los internos.

Por ello:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:

PRIMERO: Solicitar los informes ordenados - y en el plazo establecido- en el Considerando IV, al Ministerio de Gobierno y a la Fiscalía y Tribunal intervinientes en las acciones de habeas corpus citadas en la presente resolución.

SEGUNDO: Declarar la conexidad con las presentes actuaciones de los Exptes. N° 5.247/04, N° 5.248/04 y 5.262/04 iniciados individualmente por internos de la Alcaldía de Gral. Roca.

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.

ALCALDÍA DEL VIEDMA

El pasado mes de julio, concurrimos a la Cárcel de Encausados de Viedma luego del motín del día 10 de ese mes, a fin de tomar intervención ante denuncias de malos tratos que presentaban los familiares de los internos. Requerimos, a través del Ministerio Público, la debida atención médica de quienes presentaban lesiones.

Que sin perjuicio de la intervención que le cupo al Juez Penal de turno en dichas denuncias, se solicitaron informes a la Jefatura de la Policía de Río Negro sobre lo acontecido, obrando en el Expte. N° 4885/04 el responde de la Fuerza, a la que también se le preguntó sobre las condiciones en las que se ordenó el uso de gases lacrimógenos en ocasión de los disturbios en el Pabellón N° 1, dado el cuestionamiento de un familiar de dos internos.

También con relación a esta unidad, iniciamos una actuación **DE OFICIO**, ante la insuficiente asignación de personal policial. Por Resolución N° 742/04 se ordenó informes a la Jefatura de la Policía de Río Negro, que con fecha 22 de junio del 2004 indicó que: *"En la actualidad el Escalafón Penitenciario esta integrado por DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (289) Empleados Policiales, además se encuentran afectados TREINTA Y CINCO (35) efectivos correspondientes al Escalafón General, que prestan servicios en las distintas Unidades Carcelarias...la Cárcel de Encausados de esta localidad,...cuenta con OCHENTA Y DOS (82) efectivos policiales."*

Sabemos que recientemente se inició un curso para el ingreso de 50 agentes con orientación penitenciaria, lo que resulta imperioso pues sabido es que, especialmente, en las unidades carcelarias de Viedma y Gral. Roca, el insuficiente personal policial se traduce en situaciones de inseguridad dentro del propio edificio y para la comunidad ante las reiteradas fugas.

RESOLUCION N° 742/04

Viedma, 05 de julio de 2004

VISTO: El Expediente N° 4.843/04, caratulado "DEFENSORA DEL PUEBLO DE RIO NEGRO s/ insuficiente asignación de personal policial en la Alcaldía de Viedma", y

CONSIDERANDO:

I

Que una noticia publicada en el Diario Noticias de la Costa en su edición del día 28 de junio pasado indica que el personal destinado a la custodia de detenidos en la Alcaldía de Viedma resultaría insuficiente para garantizar la seguridad del lugar, evitar fugas y/o contener motines.

Que la ley 3.008 sobre Régimen Penitenciario, establece que: *"El personal penitenciario será seleccionado y especializado, teniendo en cuenta el carácter de la importante misión social que debe cumplir de acuerdo a esta ley" (artículo 36). Y agrega que funcionará en el ámbito del sistema penitenciario provincial, un instituto de capacitación del personal penitenciario (art. 37).*

Que en oportunidad de elevar nuestro último Informe Anual a la Legislatura Provincial, destacamos la auspiciosa creación del Escalafón Penitenciario en el ámbito de la Policía de Río Negro, que vino a atender una reiterada solicitud de la Defensoría del Pueblo sobre la necesidad de diferenciar las tareas de seguridad de las de custodia de detenidos, perfeccionando este último servicio.

Que asimismo, en nuestro Informe Anual dejamos expreso " que no existen por parte de los detenidos cuestionamientos hacia el personal policial que presta tareas en las cárceles, el que se esfuerza por mantener vínculos de respeto y consideración con los internos, mostrando una gran sensibilidad ante la situación de hacinamiento, indignidad y natural malestar en que éstos viven." (I.A.Nº 2002, Cap.11, pag. 67).

Que el Decreto 1.116/03 creó el Escalafón Penitenciario dentro de la Estructura Orgánica de la Policía de Río Negro, como parte integrante del Agrupamiento Seguridad previsto en la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Río Negro Nº 1.965.

Que entre los considerandos de dicho Decreto se menciona que el número de personal que cumplirá funciones en las Unidades de Detención de Viedma, Gral. Roca, San Carlos de Bariloche y de Choele Choel será de trescientos veintiocho (328).

II

Que en el marco de las atribuciones conferidas por la ley 2.756 al Defensor del Pueblo se promueven de oficio las presentes actuaciones dada la denuncia de insuficiente asignación de personal policial en la Alcaldía de Viedma, lo que comprometería la seguridad de los propios internos, la del personal policial afectado a la tarea de custodia y la de la población ante posibles fugas de detenidos. Ello así, corresponde solicitar a la Jefatura de la Policía de Río Negro un amplio informe sobre la implementación del Decreto 1.116/03 y en especial indique:

1. Cantidad de personal transferido al Escalafón Penitenciario y su distribución en las distintas unidades de detención de la Provincia.
2. Qué programas de capacitación en la especialidad penitenciaria están vigentes y cuál es el porcentaje del personal que a la fecha ha sido capacitado y/o cuenta con título con orientación penitenciaria.

Por ello:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:

PRIMERO: Iniciar las presentes actuaciones de oficio a fin de investigar la denuncia sobre presunta insuficiencia del personal policial asignado a la custodia de detenidos en la Alcaldía de Viedma.

SEGUNDO: Solicitar a la Jefatura de la Policía de Río Negro los informes formulados en el Considerando II.

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.

Otros reclamos individuales

Se han recibido varias presentaciones de condenados alojados en establecimientos carcelarios de Río Negro que solicitan la reducción de sus condenas. Los pedidos son derivados al Poder Ejecutivo en virtud de su potestad para indultar o conmutar penas que le otorga el artículo 181, inc 4, de la Constitución Provincial.

Por otra parte, en el Expte. Nº 5.188/04 sobre cuyo trámite informamos al inicio de este capítulo, obran distintos reclamos individuales que fueron atendidos en forma paralela a la investigación global de las problemáticas de la Alcaldía de Gral. Roca. Entre esas demandas se incluyen: trámites de DNI, asistencia a familiares, consultas sobre causas penales.

ASISTENCIA A DETENIDOS Y A SUS FAMILIARES

A esta Defensoría del Pueblo han llegado reclamos o presentaciones motivadas en diversas cuestiones, a saber:

- Solicitudes de ex detenidos para obtener empleo
- solicitud de ayuda de familiares de personas privadas de su libertad , denuncia riesgo social de familiares de presos y solicitudes de ayuda económica para hijos de detenidos.
- intervención para establecer acercamiento familiar
- colaboración en situaciones en las que un detenido fue trasladado a un hospital neuropsiquiátrico.
- denuncias de grupos de familiares de detenidos en estado de indigencia.
- solicitudes de designación de Defensor Oficial
- necesidades de atención médica a detenidos.
- detenidos que solicitan salidas laborales.
- colaboración en solicitud de contraer matrimonio
- asesoramiento legal para presentar revisión de causa, indultos, reducción de pena, entre otros.

En la mayor parte de los casos, se han remitido las actuaciones al Instituto de Asistencia a Presos y Liberados y en menor medida se ha tomado contacto con Defensorías Oficiales, Juzgados intervinientes, Alcaldías y Penitenciarías, a fin de canalizar las solicitudes recepcionadas.

Según un informe de la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados tiene un presupuesto mensual de \$2000 para destinar a la asistencia que se demanda, abarcando una población carcelaria que ronda entre los 450 y 500 presos.

De las actuaciones surgen datos preocupantes respecto a las condiciones de la población carcelaria, las situaciones socioeconómicas de los familiares, las reducidas posibilidades laborales condicionadas por los antecedentes, el extracto social del que surgen muchos de los detenidos etc.

Durante el período a informar hubo dos solicitudes de empleo. En ambas situaciones esta Defensoría citó en sus Resoluciones de avocación la Ley N° 3.228 que establece que "...las sociedades del Estado o con participación estatal mayoritaria y organismos públicos provinciales que contraten mano de obra para la ejecución de obras o servicios públicos con fondos nacionales o provinciales destinados a la promoción del empleo, deberán asignar un cupo no inferior al cinco por ciento (5%) de las personas contratadas a quienes se encuentren en la etapa de prueba del cumplimiento de una condena en las unidades penitenciarias o alcaldías ubicadas en territorio provincial o haya sido liberado de las mismas por agotamiento de la pena...se hará el pedido al Instituto de Presos y Liberados del Ministerio de Gobierno, quien llevará la nómina de las personas que se encuentren en condiciones de acceder a un puesto de trabajo, determinar las prioridades de cada caso y las personas que se asignan en cumplimiento del pedido".

Las solicitudes de empleo fueron tramitadas a través del mencionado Instituto y se obtuvieron respuestas favorables en ambos casos, una por la Empresa SEFEPA y la otra por la Municipalidad de General Roca. Cabe agradecer especialmente la colaboración de las mencionadas instancias gubernamentales.



Se recepcionó la presentación de un ciudadano rionegrino internado en la Alcaidía de Rawson quien peticionaba la mediación de la Defensora del Pueblo para poder contraer matrimonio con su pareja que se encontraba alojada en Alcaidía de Gral. Roca. De esta forma se estableció contacto con el Area Social de aquella institución para recabar mayor información comprometiéndose la Trabajadora Social del mismo a gestionar el pedido del interno.

En varias actuaciones se derivó a los Juzgados intervinientes las solicitudes de los diferentes requerimientos de los internos para consideración de los Magistrados.

A partir de la solicitud de los padres de un interno fallecido en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda, se efectuaron averiguaciones en la Unidad Penitenciaria y en el Juzgado interviniente para saber acerca del traslado del cuerpo del joven. Posteriormente la familia remite fax que da cuenta de las dudas de las causas del deceso ya que el cuerpo presentaba "el cráneo roto (hueco) moretones en el pómulo derecho". Así la Defensora remite fax a la Fiscalía en turno en Feria Judicial solicitando su intervención a los fines de investigar la situación denunciada.

Asimismo se recepcionó la solicitud de intervención a pedido de la hermana de un interno, quien cuadriplégico y con incontinencia de sus necesidades fisiológicas, se encontraba alojado en la Alcaidía de Roca. La Defensora presentó Recurso de Habeas Corpus solicitando al magistrado ordene dictamen médico respecto del ciudadano como así también realice inspección del lugar de su detención "y acreditándose que el mismo ve afectados sus derechos a la dignidad, ordene el inmediato traslado a un organismo asistencial que reúna los requisitos adecuados para su tratamiento. Caso contrario, primando los derechos del interno y si el Estado no cuenta con un lugar adecuado, ordene la detención domiciliaria del mismo para que cese de esta manera la denigrante condición de detención en que se encuentra M.V." El Juez interviniente hizo lugar al Recurso disponiendo que el interno sea alojado en el Hospital de la localidad con la debida custodia policial.

Capítulo III

RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS

A Mediación Comunitaria

En actuaciones iniciadas por conflictos entre vecinos de un barrio de Gral. Roca, solicitamos se intentara una mediación en el marco del Programa de Mediación Comunitaria y Métodos Alternativos de Resolución de Disputas creado por el Decreto 594/200. La Dirección General de Participación Ciudadana informó que el Centro de Mediación Comunitaria de Viedma no podía atender tal situación de conflicto por razón de la distancia. Ello motivó un pedido de informes, ordenado por la Resolución N° 1.157/04 que transcribimos más abajo, sobre el funcionamiento de dicho programa.

La responsable del área remitió en consecuencia un detallado informe de las actividades desplegadas en el último año, las que se observan más dirigidas a la implementación de la mediación en el ámbito escolar que en otros espacios comunitarios.

Ya dijimos que fue una reiterada Recomendación de la Defensora del Pueblo la realización de mediaciones para la superación de conflictos en las comunidades educativas, sin embargo, no podemos dejar de mencionar que nos llegan muchos reclamos vinculados a disputas vecinales, especialmente en barrios del IPPV, por lo que creemos que hay una deuda con la comunidad que requiere que el Ministerio de Gobierno, a cargo del Programa de Mediación Comunitaria, realice mayores esfuerzos a fin de abarcar otras ciudades además de Viedma, ya sea con la apertura de nuevos centros de mediación, además del ya previsto para el próximo año en Allen, o bien disponiendo mediaciones en otros puntos del interior de la Provincia con los mediadores del Centro Acordar de Viedma y los que se capaciten en el futuro.

Insistimos, la distancia no es un obstáculo insalvable si se trabaja fuertemente en la difusión de la propuesta del Programa de Mediación Comunitaria y su significación para la sociedad.

RESOLUCION N° 1.157/04

Viedma, 22 de septiembre de 2004

VISTO: El Expediente N° 4782/04, caratulado "....s/ Conflicto vecinal en Barrio IPPV Alfonsina Storni de Gral. Roca", y

CONSIDERANDO:

I

Que la promotora de las presentes actuaciones se presentó en ocasión de la Comisión de Servicios de la Defensora del Pueblo Adjunta en la localidad de Gral. Roca, denunciando conflictos con algunos de sus vecinos del Barrio -IPPV- Alfonsina Storni de esa ciudad.

Que la situación de conflictividad no es reciente y ello derivó en recíprocas denuncias policiales, con actuaciones ante la justicia penal en las que no se imputó a persona alguna.

Que desde la Defensoría del Pueblo se tomó contacto con el Centro de Mediación Judicial de Gral. Roca,



a fin de que indicaran si con relación a las personas mencionadas en el acta de fs.1 se había solicitado la intervención de ese Centro para mediar en litigios ventilados judicialmente, habiéndose indicado que no existían antecedentes de causas en trámite al respecto, condición ésta indispensable para que actúe esa dependencia.

Que asimismo, y como en otras oportunidades, la Defensoría del Pueblo consultó al Centro de Mediación Comunitaria del Ministerio de Gobierno para que actuara con relación al presente caso. Al respecto, la Directora General de Participación Ciudadana se remitió a la Nota N° 30/04 que en Junio pasado remitiera a esta Defensoría del Pueblo en respuesta a similar pedido, donde se informó sobre *"la imposibilidad de dar curso a la mediación solicitada, en función de la distancia entre el actual Centro de Mediación Comunitaria con asiento en Viedma y la ciudad de General Roca, donde debe darse tratamiento a la problemática planteada en el mismo"*.

Que el informe de la funcionaria además indicaba que se había tomado la decisión de abrir un Centro de Mediación con asiento en Allen para atender los casos del Alto Valle y que en Agosto se iniciarían los cursos de capacitación con profesionales del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

II

Que esta Defensoría del Pueblo ha requerido en varias ocasiones la actuación del Centro de Mediación Comunitaria, sin que se hayan logrado éxito en la convocatoria de las partes o bien, por los motivos de distancia invocados, ni siquiera se tomaron los casos derivados.

Que es sabido que los métodos alternativos de resolución de conflictos son herramientas novedosas que están comenzando a ser difundidas desde distintos ámbitos - judicial, educativo, comunitario- y muchas veces, el desconocimiento sobre sus alcances genera la reticencia de las personas a resolver sus disputas a través de la mediación.

Que en el Programa de Mediación Comunitaria y Métodos Alternativos de Resolución de Disputas creado por el Decreto 594/2002, propicia justamente esta importante instancia para la superación de conflictos. Efectivamente, se trata de un proceso voluntario en el que se encuentra asegurada la confidencialidad, con la intervención de un tercero neutral -el mediador- que facilita la comunicación entre las partes con miras a que éstas celebren sus acuerdos.

Que las limitaciones apuntadas por la Directora General de Participación Ciudadana denotan que no se han alcanzado aún los objetivos propuestos por el citado Programa, y desde el año 2002 sólo se ha constituido el Centro de Mediación Comunitaria de Viedma, y se afirma que deviene "imposible" la intervención de los mediadores afectados al Programa en otros puntos de la Provincia.

Que es oportuno recordar que el programa provincial que creó el Decreto 594/02 se inscribe en el marco del convenio suscripto el 17 de marzo de 1999, entre la Provincia de Río Negro y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, que impulsa el Plan Social de Asistencia Jurídica a la Comunidad y que tiene como propósito estimular y promover la extensión de las formas y métodos participativos de resolución de conflictos en todo el territorio de la Nación.

Que el informe de la Dirección General de Participación Ciudadana indicaba que en el mes de agosto comenzarían a capacitarse nuevos mediadores con un equipo del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Por ello:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:

PRIMERO: Solicitar informes a la Dirección General de Participación Ciudadana sobre el avance de las gestiones a cargo de esa dependencia para la implementación de nuevos Centros de Mediación



Comunitaria en el territorio de Río Negro.

SEGUNDO: Remitir a esa Dirección el reclamo de fs. 1 a fin de que tome nota de los antecedentes y evalúe la posibilidad de una convocatoria a mediación de los vecinos del Barrio Alfonsina Storni de Gral. Roca.

TERCERO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.

B- Intervenciones informales y/o personales

Generalidades

Esta modalidad, instrumentada desde el año anterior se ha ido perfeccionado. La experiencia nos demostró la necesidad de cambiar la forma de relacionarnos con los organismos, para lograr la celeridad en la respuestas que determinados requerimientos de los ciudadanos demandaban. Así podemos afirmar que logramos, mediante la gestión personalizada e informal, un resultado del ciento por ciento.

Si tomamos como referencia los 104 expedientes trabajados, en el análisis de los mismos vemos que 76 fueron resueltos, se declararon 3 incompetencias, existe 1 con tramitación interrumpida y 24 en distintas etapas de tramitación.

Ahora bien, no siempre se obtuvieron respuestas que resultaran satisfactorias para el reclamante. Pero lo positivo de la gestión es que el ciudadano fue debidamente informado acerca de la imposibilidad de canalizar favorablemente su pedido, por no encuadrarse en normativas vigentes. Una respuesta, aún negativa, es siempre mejor que el silencio.

Humanamente, el conflicto toma "cara" ya que se toma contacto con el reclamante, como con el funcionario del área al que esta dirigido el reclamo, capitalizando conocimientos adquiridos en los entrenamientos de mediación y / o modos alternativos de resolución de conflictos.

La posibilidad de escuchar las dos campanas de una misma realidad, otorga una velocidad de resolución que en ocasiones impresiona y sorprende a las dos partes y a nosotros que somos los mediadores y armonizadores de las situaciones.

El obviar papelería en situaciones extremas; posibilita acelerar soluciones que de otra forma sería imposible de lograr, siendo una de las ventajas mas evidentes.

El inicio personalizado de un trámite asegura, casi invariablemente, que luego del primer contacto con las partes, el 50% del problema esté en vías de solución, en ocasiones es superior. Luego entre 24 y 48 horas se resuelve la cuestión y el cierre de un expediente. Siempre, aún concluido el trámite, se realiza un seguimiento.

La forma de informar lo actuado a requerimiento de la Defensora en cada expediente o en tareas asignadas a su criterio, es volcada en actas informativas internas, que son visadas por la misma y/o su Adjunta, que luego son incorporadas a los expedientes respectivos, si los hubiere, y sino quedan archivadas como prueba de la realización de tareas encomendadas.

No existe mayor beneficio en todo esto que el trato directo, inicio y profundización de las relaciones interpersonales, fundirse en el tema planteado, no hay forma de abstraerse, sen-



tir las posturas y reacciones de las partes ayudan a focalizar con mayor agudeza y rapidez de que estamos hablando.

En ocasiones la parcialidad del reclamante en los datos aportados en su queja, dispara en la otra parte una reacción arto complejo, la cual luego de superada, cuestión interesante de observar, abre inmediatamente el camino para la búsqueda de una solución al problema planteado y la instrumentación inmediata de los mecanismos que ayuden a esta solución.

Se activa en el trato interpersonal una serie de sensaciones y situaciones que francamente hay que estar decidido a sobrellevar, el nivel del compromiso se potencia y la cercanía, no

EXPTE.Nº	TEMA	ESTADO
3394/03	p/ayuda social y materiales p/const	solucionado.
3803/03	Rec.por bajar serv.cable Bº América	Solucionado
3846/03	Solic.ayuda p/operar a su esposo de la vista	Solucionado
3936/04	S/solicitud materiales al Provi	solucionado
3938/03	P/cobro cuota fondo solidario desocupado.	solucionado.
3981/03	Requiere co urgencia medicación	Solucionado
3993/03	S/conflicto entre vecinos	Solucionado
3996/03	S/amenazas Bº 20 de junio y Ceferino	Solucionado
4059/04	S/problemas con familias vecinas	incompetencia
3650/03	Por crédito CREAR para microemprendimiento	solucionado.
3828/03	Por ayuda social	solucionado.
5065/04	excombatiente Malvinas....p/ pensión	solucionado.
4722/04	P/reconexión de servicios	solucionado.
4297/04	Por reclamos servicios básicos en lote fiscal	solucionado.
3529/03	Por conmutación de pena	solucionado.
3470/03	Por subsidio	solucionado.
3660/03	Por reclamo liquidación despido	solucionado.
3720/03	Por ayuda social y económica	solucionado.
4065/04	Por problemas con servicio T.V	solucionado.
4081/04	Por ocupación ilegal	Incompetencia
4153/04	Por problemas con el tren patagónico	solucionado.
4339/04	Por extensión plazo presentación per.juridicas	solucionado.
4401/04	Por reclamo al municipio de Viedma	solucionado.
4550/04	Por falsas afirmaciones afiliado de UPCN	solucionado.
4551/04	Por reclamo accidente de trabajo	solucionado.
4353/04	Por robo e inseguridad en Las Grutas	Interrumpido
4559/04	Por certificación de servicios supercanal	solucionado.
4587/04	P/ problemas de vecinos c/ municip.Bariloche	solucionado.
4588/04	Por ayuda p/resolver problema habitacional	solucionado.
4665/04	Por problemas vecinos de Bariloche	solucionado.
4835/04	Solicitud de servicios en terrenos otorgados	solucionado.
4970/04	Sobre cobertura accidente de trabajo	solucionado.
5111/04	Sobre secuestro camión	solucionado.
5181/04	Sol. se interceda p/ carné de conductor	solucionado.
5185/04	Denuncia p/ peligro estación de servicio aban.	solucionado.
2794/03	Solicita se intervenga causa de fallecimiento	solucionado.
2680/03	Inconvenientes con la mutual policial	solucionado.
3397/03	Solicita dictamen junta medica	solucionado.
3723/03	Denuncia persecución	solucionado.
3816/03	Reclamos por derechos laborales	solucionado.
3836/03	Por incautación de elementos de pesca	solucionado.
3875/03	Solicita intervención por robos de animales	solucionado.
4580/04	Su solicitud subsidio por razones de salud	solucionado.
4845/04	Sol. p/ que su marido no sea trasl. del penal	solucionado.
5203/04	Solicita información por exclusión esc.cadetes.	solucionado.
5208/04	Sol. Interv. p/obtener medicament oncológicos	solucionado.
5327/04	Sol.deriv.hijo p/ser oper. en hospital a.comp..	solucionado.
5196/04	Sol.informes. const.viviendas	En tramite
4053/04	Mal desempeño func.comision.Pilcaniyeu	En tramite
3841/03	Solicitud ayuda comp..materiales	En tramite.
5242/04	Solicitud facilidades pago hab.comercial	solucionado.
5237/04	S/ inconvenientes mejoras terreno fiscal	En Tramite.
4696/04	S/invest.irregular.com.fomento Cerro Policia	En Tramite

Áreas en Particular

▣ Salud Pública

No es un tema menor la situación coyuntural que atraviesa un área crítica como lo es Salud Pública. Ya dijimos anteriormente que no había sido éste un buen año. Pero sí debemos destacar que en cuanto a la tramitación personalizada para resolver casos urgentes de personas que así lo demandaban por su dolencia, cada vez que se ha recurrido la respuesta fue favorable, particularmente resaltamos el trabajo de la Directora General de Servicios de Salud, quien atendió toda la gama de solicitudes planteadas desde los problemas en hospitales, regularización de los suministros de medicamentos complejos, derivaciones a centros de alta complejidad dentro y fuera del territorio provincial, ya sea vía terrestre o aérea, dependiendo de la urgencia de los mismos.

Esto nos ha permitido canalizar infinidad de requerimientos, normales y urgencias, el poder asistir luego de interrupciones no muy justificadas con enorme celeridad a enfermos oncológicos o con enfermedades crueles como la esclerosis múltiple han reflejado una capacidad de reacción poco común.

Expedientes como el 5208/04, 5327/04, hablan por sí solo y por el tiempo de resolución de una administración efectiva de los recursos de salud, en esta área específica, pero con tratamientos personalizados.

En dos oportunidades personal de la Defensoría del Pueblo se ha constituido en el hospital con la finalidad de corroborar una serie de denuncias, sobre los malos procedimientos para el otorgamiento de turnos, lamentablemente debo informar que todo lo denunciado coincidió con lo que pudo observarse.

Con la Casa de Río Negro, en Capital Federal, se ha ideado un sistema de comunicación con esta Defensoría, la cual nos mantiene informado. Particularmente de un caso en cuanto a la estadía de un paciente y un familiar acompañante, vecinos de Sierra Grande, en esa ciudad.

▣ Crear

Se ha recurrido en muchas oportunidades a la agencia local, en donde siempre se nos ha atendido con cordialidad y prestancia ante cada una de las consultas realizada.

▣ Servicio Penitenciario Federal

Expediente 4585/04, se ha formalizado un encuentro con la autoridad del penal, quien allana todo el camino ante los requerimientos formulados por esta Defensoría y nos ha tratado con deferencia. Evacuando cada una de las consultas y aclaró todos los temas que originaron el expediente citado.

▣ Municipalidad de Viedma

Se han formalizado varios contactos con el municipio local, donde invariablemente nos han atendido con toda corrección.



Por cita runa intervención importante, con el Director de Seguridad e Higiene, en relación con el expediente n° 5185/04 cuya promotora denunciaba puntualmente el peligro existente por una estación de servicio cerrada en la intersección de las calles, Tucumán y Álvaro Barros, se destaca que la actividad desplegada por esta Dirección en concordancia con otros organismos competentes fue importante, lo que redundó en beneficio de devolverle la tranquilidad a los vecinos, sensación ausente desde hacía bastante tiempo, como lo manifestaran.

▣ **UPCN**

Se ha tomado contacto con este gremio en dos ocasiones por un número igual de expedientes, ofreciendo su Secretario Gral. toda la documentación e información que le fueran requeridas y así dilucidar los problemas planteados.

▣ **PROMEBA VIEDMA (Programa de mejoramiento de viviendas)**

Ante una aparente serie de incumplimientos de la empresa constructora, según lo expuesto por los vecinos nos hemos constituido en el barrio General Lavalle, procediendo a controlar la denuncia de los vecinos. Se realizaron 9 inspecciones oculares, sobre las que se encuentran agregadas a los expedientes correspondientes y me remito al Libro II, Capítulo IV del presente.

Además se ha participado de una serie de reuniones con los vecinos y autoridades municipales y la empresa constructora

▣ **Televisión por Cable**

Hemos entablado conversaciones con las autoridades del servicio, ya sean por cortes, suspensión temporal o diferencias laborales con algunos de los empleados del mismo. En cada ocasión fuimos atendidos por el máximo responsable de la empresa, quien invariablemente soluciona el problema, atendiéndonos con consideración y cortesía.

▣ **Asociación Civil "Milikilin Huitral"**

Se tomó contacto con la responsable de esta asociación, con la finalidad de poner en su conocimiento distintas pautas legales y administrativas para regularizar su situación comercial, puesto que esta asociación era en sus inicios sin fines de lucro, pero ahora y desde hacía muchos años comerciaban sus productos artesanales, con el mercado artesanal provincial.

▣ **Secretaría de Estado de Trabajo**

Fueron reiteradas las oportunidades en que nos acercamos a este organismo con distintas problemática, las cuales fueron solucionadas y evacuaron además todas las consultas realizada.

▣ **PROVI**

Hemos recurrido a este organismo en reiteradas oportunidades, siempre bien atendidos,

en dos de ellas y por un número igual de expediente, se logró que se entregaran dos créditos para construcción del módulo habitacional del programa.

▣ **Regimiento de Infantería I Patricios- Buenos Aires- Ejercito Argentino**

Con motivo de tratar expedientes referidos a solicitudes de pensiones de guerra para excombatiente, como por ejemplo el 5065/04, nos hemos puesto en contacto con el Regimiento de Patricios en Campo de Mayo quienes llevan todo lo relacionado con el conflicto bélico de 1982, guerra de Malvinas, en donde fuimos atendidos por oficiales y suboficiales, los cuales no sólo despejaron las incógnitas planteadas, sino también, se pusieron a disposición de esta Defensoría para cualquier otra consulta que surja.

▣ **Dirección General Comisiones de Fomento**

Existen tres expedientes en el curso del año relacionados a comisiones de fomento, el primero n° 4053/04, 4696/04 y 5883/04. El primero de ellos con contestación del organismo y los otros dos en trámite. En cuanto al primero, Res. N° 490/04, siendo no sólo necesaria una reiteración de nota N° 2015/04, sino que debemos poner de manifiesto que este Comisionado no conoce los alcances de esta Institución. Los expedientes N° 4696 y 5883 (los dos del 04) no difieren significativamente, uso arbitrario de los recursos que provee el gobierno a las comisiones, desatención a la gente, ausencia del comisionado, manejo arbitrario del vehículo de la comisión y la novedad tal vez se encuentra en el expediente n° 4696/04, donde se denuncia la explotación de una cantera de Basalto, el uso de viviendas sin terminar para el cuidado de caballos, la situación de la sala de primeros auxilios etc., cuya promotora sostiene que son todas cuestiones para aclarar.

▣ **Bomberos Voluntarios de Viedma**

Se realizaron gestiones y consultas ante autoridades de Bomberos con la finalidad de definir el traslado de una parte del cuartel central al barrio Lavalle.

Se averiguaron todos los requerimientos hechos por la Institución, se constató que ofrecía el barrio para el asiento del mismo y el tema quedó casi terminado, sujeto lógicamente a una cuestión presupuestaria.

▣ **SEFEPA**

Con respecto a la empresa estatal de ferrocarril, también se tuvo que atender reclamos de distinta índole, como corralario de estos la Defensoría, procedió en algún momento del año a realizar un control detallado de la realidad del servicio, cuyo resultado quedó plasmado en un informe de esta Defensoría.

▣ **IPPV - CASA RIONEGRINA**

Por medio del expediente n° 5196/04, relacionado a un pedido de vecinos de Viedma, para la construcción de 21 viviendas en el loteo Silva es que esta Defensoría y en este caso en particular toma contacto con el organismo antes mencionado, con la finalidad de armonizar posiciones entre este y el grupo de vecinos mencionado, lamentablemente este



problema de vieja data, de casi un año, sigue sin resolución.

Los vecinos han hecho y conseguido todo lo solicitado por el Instituto, pero al momento de llevar adelante la construcción, comenzaron los problemas, los cuales se suceden hasta hoy sin mayores variaciones, en un principio la intermediaria en la construcción de las viviendas sería AMOC. La mutual de los obreros de la construcción, pero según lo dicho por el señor xxx del IPPV, la cotización de estos para construir las mencionadas viviendas fue variando, comenzando en 4200 pesos y terminando luego de un cuarto ajuste en 7200 pesos que el Instituto no accedió a pagar, luego de esto y ante el requerimiento del señor Intendente municipal, de construir 12 viviendas tipo Casa1, se evaluó la posibilidad de que las primera 5 viviendas reclamadas por el grupo de vecinos, representados por el señor xx, sean incluidas en ese paquete.

Lo cierto es que al decir del señor del IPPV había que esperar la respuesta respectiva, sin embargo esta hasta hoy no llega y la inquietud de los vecinos va en aumento, lo que motivó que el día 25 de noviembre me comunicara con la oficina del mencionado funcionario quien no me pudo atender por que estaba en una reunión pero su secretaria se comprometió para que, luego de finalizada dicha reunión, lo hiciera, cosa que no sucedió.

El día martes 20 de diciembre de 2004, me vuelvo a comunicar con esa oficina, ante un nuevo requerimiento del señor xxx igual respuesta, igual incumplimiento de contestar la llamada como la semana anterior.

Lamentablemente el no acierto de las autoridades del Instituto en la búsqueda de soluciones, sigue relegando casi injustamente a 21 familias a vivir con uno de los derechos mas importantes cercenado, el derecho a la vivienda, pareciera que una serie de tecnicismos pueden relegar la cuestión humana a un segundo plano.

No obstante ello no se perderá la esperanza y confiaremos en que el funcionario del IPPV (que si tiene un techo donde guarecerse de la inclemencia del tiempo) encuentre en un espacio de relax brindado por esta misma comodidad, que gracias a Dios él posee, la solución para éstas familias que esperaban una nueva navidad en la peor de las incertidumbres.

▣ Comisión control transporte público de pasajeros

Se realizó una comisión personal, tomando todos los transportes públicos de la provincia, que me remito al Libro I, Capítulo II F, donde se transcribe el Acta interna de todo lo vivenciado.

▣ Otros trámites

Se realizaron decenas de trámites personales sin ningún tipo de expedientes, en diversas temáticas tales como: reconexiones de servicios como gas, luz y agua, prórroga para los cortes, se tramitaron planes de financiación para el pago de viejas deudas, se destrabaron mecanismos administrativos que no posibilitaban la obtención del carné de conductor, se logro la reparación de calles de tierra y su posterior nivelación, etc.

Lo relevante, a veces, es la alegría que se dibuja en la cara de la gente y la sensación de tranquilidad que la embriaga luego de lograr eso que para ellos es tan importante.



Es una obligación moral ayudar al semejante y no todo es para anotar lo, los hombres y mujeres de bien que tengamos la suerte y el honor de trabajar en un sitio emblemático como lo es una Defensoría del Pueblo, estamos obligados a tratar de modificar aquello que suscribió Montaigne ante lo escrito por Plutarco: "HAY MAS DISTANCIA ENTRE TAL Y TAL HOMBRE, QUE ENTRE TAL HOMBRE Y TAL BESTIA.

▣ Atención al público

Nuestras estadísticas, reflejan la cantidad de personas por día que se atienden. Esa es en definitiva, la misión, ayudarnos y acercarnos en aras del bien común.



Capítulo IV

OTROS DERECHOS DE LOS PUEBLOS

A- LIBERTAD DE EXPRESION Y DIFUSION. DERECHO DE REPLICA

Libre acceso a la información pública

Ante el pedido de un ciudadano de contar con acceso al contenido completo del Boletín Oficial a través de Internet, solicitamos informes al Ministerio de Coordinación, que remitió respuesta desde la Secretaría Legal, Técnica y de Asuntos Legislativos informando que "se está trabajando en la realización de una base de datos con el fin de publicar en la página web de la Provincia de Río Negro todos los decretos del Poder Ejecutivo Provincial, que sean de interés general" (sic), agregándose que tal tarea requiere tiempo para su implementación.

Entendemos acertado el reclamo del ciudadano desde que los medios informáticos son de uso generalizado entre la población y facilitan el acceso a las fuentes de información pública, derecho éste consagrado en los artículos 4 y 26 de la Constitución Provincial sobre publicidad de los actos de gobierno y libre acceso a las fuentes públicas de información, y que regula la ley 1.829, modificada por la ley 3.441.

Recordemos que esas normas constitucionales disponen que *"todos los actos de gobierno son públicos. Son publicados íntegramente los que se relacionan con la renta y los bienes pertenecientes al gobierno provincial y municipal"* (art.4º Const.Prov.) y que *"Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho del libre acceso a las fuentes públicas de información"*(art. 26)

Si bien no es tarea sencilla generar las bases de datos de los decretos provinciales, la Defensora del Pueblo recientemente formuló una sugerencia al Poder Ejecutivo para que habilite la edición digital del Boletín del día, hasta tanto se pueda acceder a los anteriores, sin perjuicio de la coordinación de trabajos en el seno de la Comisión Interpoderes del Digesto Jurídico de la Provincia Río Negro, que con similar impulso de garantizar la igualdad entre los ciudadanos en el acceso a la información con seguridad jurídica, llevará adelante los objetivos de la ley 3784 que fija las pautas para el ordenamiento de normas constitucionales, a fin de crear un cuerpo de normas sistematizadas.

B- LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

Libertad de Expresión y Difusión. Derecho a réplica.

No son pocas las denuncias que llegan a nuestro conocimiento y que involucran el ejercicio de los derechos de libre expresión y difusión de ideas y, su correlativo, el derecho a réplica. Las presentaciones han sido promovidas tanto por particulares que se han sentido agraviados por publicaciones periodísticas, como por los propios periodistas que imputaron presiones del poder político de su localidad luego de difundir noticias o testimonios críticos de esa gestión.

El carácter personalísimo de las acciones judiciales previstas para la defensa de esos derechos, motivaron que nuestra intervención fuera sobre todo de asesoramiento sobre el ejer-

cicio de tales tutelas jurisdiccionales. Nos referimos al amparo informativo y otras acciones del fuero penal.

Sin embargo, cuando se trató de cuestionamientos dirigidos al funcionarios públicos (hubo un caso a nivel municipal) cursamos pedidos de informes y exhortamos a enfatizar el respeto a los derechos de libre expresión y difusión de las ideas. Tales los términos de la resolución que sigue.

RESOLUCION N° 1.046/04

Viedma, 02 de septiembre de 2004

VISTO: El Expediente N° 4967/04 , caratulado ".....s/ denuncia amenazas " , y

CONSIDERANDO:

I

El promotor de las presentes actuaciones es periodista, ejerce su profesión en la localidad dey manifiesta que en una nota que realizara en un programa que conduce en el canal local de televisión, una ciudadana que era entrevistada cuestionó a las autoridades municipales. Indica a partir de ello, el Asesor Legal del Municipio por teléfono lo agredió y amenazó.

Aclara que ofreció al funcionario que se presentara en su programa para ejercer su derecho a réplica, sin embargo éste se negó. Que posteriormente, habiendo tomado estado público el conflicto, en una entrevista cruzada en el programa de otro colega del medio radial, el abogado no admitió haberlo injuriado, por lo que prefirió "cortar el diálogo" (sic).

II

Que la Constitución de la Provincia de Río Negro consagra el **derecho de información y expresión** en el artículo 26 que, en su primera parte, dice: " *Es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente sus ideas y opiniones, y de difundirlas por cualquier medio, sin censura de ninguna clase. Nadie puede restringir la libre expresión y difusión de ideas...*".

Y agrega: "....Aquel que abusare de este derecho sólo será responsable de los delitos comunes en que incurriere a su amparo y de las lesiones que causare a quienes resultaren afectados. Se admite la prueba como descargo de la conducta oficial de los funcionarios y empleados públicos.

Los delitos cometidos por cualquiera de esos medios nunca se reputarán flagrantes." (Art.26 CP)

Que a su vez, el artículo 27 de nuestra Constitución Provincial asegura el **derecho a réplica**:

"Ante informaciones agraviantes o inexactas vertidas a través de cualquier medio de difusión, la persona o entidad afectada tiene derecho a rectificación o respuesta gratuita, conforme lo reglamenta la ley, la que asegura sumariedad e inmediatez en el trámite."

Que ello así, la Ley 2.384 dispone : "Art. 3 - Amparo informativo: A efectos de asegurar el ejercicio de los derechos a que se refieren los artículos 20, 26 y 27 de la Constitución de la Provincia y los artículos 1 y 2 de la presente Ley, establécese la acción de amparo informativo en favor de toda persona, física o jurídica, que temiera ver perjudicados su privacidad, su honor o el goce completo de sus derechos, según el caso, ante informaciones agraviantes o inexactas vertidas a través de cualquier medio de difusión."

Que por otra parte, el aquí recurrente podrá instar la acción penal ante actos contra su persona presuntamente tipificados como delitos (amenazas, calumnias e injurias), acciones éstas que tienen carácter personalísimo.



III

Que el art.9 inc.e de la ley 2.756, faculta al Defensor del Pueblo a " Investigar todo hecho que, emanado de órgano del Estado o de particulares, suponga un ataque o lesión de la libertad de expresión e información".

Que de los hechos narrados surge que el periodista no se vio limitado en el uso de su derecho a informar y expresarse, no obstante las derivaciones en los presuntos agravios proferidos por un funcionario, quien por otra parte, conforme lo dichos del periodista no quiso ejercer el derecho a réplica en el mismo medio que difundió la nota.

Que aún cuando se encontraren superados los conflictos relatados por el aquí denunciante, es oportuno hacer saber al Señor Intendente Municipal de ... el tenor de la presentación de fs. 1, para que formule sus consideraciones con relación al presente reclamo, e informe:

- * Si ya había tomado conocimiento de la queja del periodista que promueve las actuaciones.
- * Si desde ese Municipio se ejerció el derecho a réplica ante declaraciones difundidas en el programa que conduce éste.

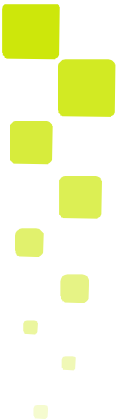
Finalmente, en la inteligencia que el Señor Intendente comparte nuestra vocación por evitar hechos que lesionen los derechos de expresión e información, exhortamos al titular del Ejecutivo Municipal a que enfatice su prédica en este sentido y tome las acciones necesarias en el ámbito de su administración, a fin de asegurar el respeto de esos derechos.

Por ello:

LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:

PRIMERO: Solicitar los informes del Considerando III al Señor Intendente de

SEGUNDO: Regístrese, Notifíquese, Cumplido, Archívese.-



Libro IV - Informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Río Negro

